LAS ATRIBUCIONES JUDICIALES DE LOS CABILDOS CATEDRALICIOS EN ÉPOCA MODERNA. CONFLICTOS Y FALTAS DE LOS CAPITULARES EN SALAMANCA: SIGLOS XVI-XVII*

POR

FRANCISCO LUIS RICO CALLADO¹

Grupo de investigación ARDOPA, Universidad de Extremadura

RESUMEN

En este trabajo se estudia la naturaleza las atribuciones jurisdiccionales de las que gozaron los cabildos catedralicios desde la Edad Media a partir de la institución de los jueces adjuntos, que fue reconocida en Trento. Tanto durante la celebración de dicho Concilio como con posterioridad a él, los obispos españoles intentaron reducir sus poderes y, en algunos casos, eliminarlos con el fin de controlar y reformar mejor a sus cabildos. Esto desembocó en una pugna que se prolongó a lo largo de la Edad Moderna. Además de estudiar esta cuestión a partir de un estudio de caso, aclarándola desde un punto de vista tanto jurídico como histórico, la documentación relativa a la actividad de los jueces adjuntos permite hacer luz sobre cuestiones como la reforma de las costumbres, los delitos de los capitulares, así como su resistencia al proceso de profesionalización del clero que tuvo lugar en los siglos XVI y XVII. El trabajo se centra, particularmente, en el cabildo catedralicio de Salamanca en dichas centurias.

PALABRAS CLAVE: Concilio de Trento; jurisdicción; cabildo catedralicio; Salamanca; delitos; Derecho canónico; reforma eclesiástica.

THE JURIDICAL POWERS OF THE CATHEDRAL CHAPTERS IN THE EARLY MODERN PERIOD. CONFLICTS AND CRIMES OF THE CAPITULARIES OF SALAMANCA: XVITH AND XVIITH CENTURIES

ABSTRACT

The present contribution studies the jurisdictional powers of the Spanish Cathedral Chapters from the Middle Ages from the point of view of the "jueces adjuntos", a legal institution which was recognized by the Council of Trent. During the celebration of this Council and afterwards, the Spanish bishops tried to reduce the powers of these officers and, in some cases, to eliminate them in order to better control and reform the Cathedral Chapters. This led to a struggle which took place all over the Early Modern Period. This question is studied from a legal and historical point of view. Both of them contribute to set a new light over a documentation which permits not only to describe the faults and the habits of the capitulars, but also to understand how they were affected and, in some cases, resisted to the professionalization of the clergy which took place during the XVIth and XVIIth Centuries. Particularly, the author studies the situation of the Cathedral Chapter of Salamanca in these Centuries.

KEY WORDS: Council of Trent; ecclesiastical reform; Cathedral Chapter; Salamanca; faults; Canon Law; ecclesiastical reform.

CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO / CITATION: Rico Callado, F. L. 2019. «Las atribuciones judiciales de los cabildos catedralicios en época moderna. Conflictos y faltas de los capitulares en Salamanca: siglos XVI-XVII». *Hispania Sacra* 71, 143: 233-247. <https://doi.org/10.3989/hs.2019.017>

Recibido/Received 11-07-2017

Aceptado/Accepted 18-04-2018

* La investigación en que se basa este artículo se enmarca en el proyecto de investigación: *Fronteras culturales en el mundo hispánico (siglos XVI-XVII). Entre ortodoxias y heterodoxias*, otorgado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Referencia: HAR2014-52434-C5-1-P. También ha sido, en parte, posible gracias a la financiación del Gobierno de Extremadura, cofinanciada con fondos FEDER, «Programa operativo FEDER de Extremadura, 2014-2020. Consejería de Economía e Infraestructuras. Junta de Extremadura. Ayuda para la realización de actividades de investigación y desarrollo tecnológico de divulgación y de transferencia de conocimiento por los grupos de investigación de Extremadura»

¹ franciscorico@unex.es / ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0003-1765-8127>

La implantación de las resoluciones del Concilio de Trento generó resistencias en diferentes estamentos de la Iglesia, entre los que destacaron los cabildos catedralicios. Muchos de los problemas surgidos en su aplicación tuvieron, más allá de las circunstancias locales, un carácter estructural.² El cumplimiento, por parte del clero de las catedrales, de las obligaciones pastorales y la asunción de unos comportamientos acordes con su condición solamente se hicieron efectivos de un modo paulatino.³ Dichos objetivos se alcanzaron gracias a una mejora de la formación y a la represión de sus faltas. Si bien poseemos trabajos generales sobre estas cuestiones, desconocemos los conflictos concretos que dicho proceso provocó en las diferentes diócesis. Estos permiten comprender, como veremos, los obstáculos a los que tuvieron que hacer frente las autoridades diocesanas para afirmar su poder.⁴

El estudio de caso que proponemos pretende, desde un enfoque local, aclarar algunas problemáticas generales. Más concretamente, vamos a tratar la polémica surgida en torno a los jueces adjuntos. Dichas figuras emanaron del ejercicio de los derechos jurisdiccionales de los cabildos que muchos obispos se empeñaron en reducir. Analizaremos esta cuestión recurriendo tanto a las alegaciones utilizadas por las partes enfrentadas, como a los acuerdos establecidos entre ellas. Junto a esta perspectiva jurídica no pasaremos por alto otra de carácter histórico.

El debate sobre las atribuciones de estos magistrados se suscitó entre finales de los años treinta y principios de los cuarenta del siglo XVI. En este momento, los cabildos castellanos tuvieron problemas disciplinarios importantes. Así, por ejemplo, tanto en Calahorra como en Badajoz, se produjeron, con relativa frecuencia, altercados entre los capitulares. Estos reflejan unos patrones de vida alejados de la ejemplaridad exigida a los clérigos.

Por otro lado, dichas instituciones sobrepasaron, en algunos casos, los límites asignados a su autoridad disciplinaria y juzgaron, al margen de la autoridad episcopal, no solamente las faltas menores, sino también las graves, dictando unas penas cortas que, con frecuencia, se condonaron. Esto contribuyó, en cierta medida, a la relajación moral de los capitulares.⁵ Desde finales del siglo XIV, cuando el absentismo episcopal implicó que se tolerasen los delitos, se arrastró esta inercia, contra la que lucharon algunos prelados pretridentinos.⁶

En 1546 los obispos españoles asistentes a Trento incluyeron en sus programas reformistas la supresión de las exenciones jurisdiccionales de los capítulos catedralicios. En principio, el papado estuvo dispuesto a conceder esta reivindicación, dejando al margen aquellas instituciones a

las que se hubiesen reconocido dichos derechos desde su creación. El decreto correspondiente, fijado en la sesión VI de *Reformatione*, ha sido tildado de confuso y dio lugar a interpretaciones encontradas. Del lado de los obispos, se consideró que su aplicación afectaba también a las instituciones exentas. Estas, en cambio, se opusieron frontalmente a esta pretensión y pidieron al Papado una interpretación que las favoreciese.⁷

Los prelados castellanos iniciaron las visitas de los cabildos en 1552, coincidiendo con la suspensión de los trabajos del cónclave tridentino. Tras obtener el apoyo real impusieron graves sanciones a los canónigos que no se plegaron a sus dictados.⁸ Paralelamente, las corporaciones sumaron esfuerzos para resistirse a aquellas y, ante la inminencia de la aprobación del Concilio por parte del Papa, se reunieron en Valladolid en 1553. De este modo, se perfilaron las fuerzas externas que jugaron en favor de uno y de otro oponente. El rey, a través del Consejo de Castilla, insistió en la necesidad de aplicar los cánones conciliares.⁹ Por el contrario, los cabildos encontraron un apoyo decidido en el Papado y, particularmente, en los nuncios. Ambas instancias los ampararon frente a las acciones, no siempre legales, de los prelados.¹⁰

Hemos de tener en cuenta, por otro lado que, en los últimos años se ha suscitado, tanto en Italia como en Francia, un renovado interés por el estudio de las faltas del clero diocesano. Con anterioridad, dicha cuestión ha dado lugar, en nuestro país, a trabajos centrados, fundamentalmente, en el siglo XVIII, de modo que el periodo comprendido entre los siglos XVI y XVII está a la espera de estudios más profundos. Esto se hace más evidente en el caso de las infracciones del clero vinculado a las catedrales que, en buena medida, desconocemos.¹¹

Dos de los delitos que más destacaron entre el clero diocesano estuvieron relacionados con la violencia y la incontinencia. Entre finales del siglo XVI y mediados del siglo XVII, los imputados por incumplir el celibato en la diócesis de Salamanca fueron el 18,12 % del total de los procesados. Estos constituyeron, pues, casi una quinta parte y su peso fue aún mayor si tenemos en cuenta solamente las infracciones cometidas en el siglo XVII. Estos datos son comparables a los de otras diócesis donde, además, las agresiones tanto físicas como verbales fueron muy comunes.¹²

En esta contribución prestamos una particular atención a ambas faltas, partiendo de la base de que el análisis de los delitos de los capitulares tropieza con obstáculos documentales importantes. En efecto, muy a menudo, solamente disponemos de noticias indirectas. Esto se hace evidente en el caso del cabildo catedralicio de Salamanca, donde

² Siglas: ACS, Archivo catedralicio de Salamanca. ADS: Archivo diocesano de Salamanca.

Fernández Terricabras 2000: 353. El caso portugués ha sido estudiado por Ribeiro da Silva 2013.

³ Fernández Terricabras 2000: 352. Esto cabe situarlo en un proceso de "profesionalización" del clero: Turchini 1994; Sangalli 2005, 2007.

⁴ Firpo 2016; Mancino y Romeo 2014.

⁵ Es significativo el caso del beneficiado Hernando de Buitrago respecto a la lenidad de las penas impuestas por los cabildos, incluso en casos de extrema gravedad (Marín 1948).

⁶ Guijarro 2013. El concubinato alcanzó cotas importantes: Sánchez Herrero 1976.

⁷ Gaztambide 1975.

⁸ Fernández Terricabras 2008; Gil Sanjuán 1994.

⁹ Marín 1948: 8-9.

¹⁰ Fernández Terricabras 2000: 334.

¹¹ Irigoyen López 2010; Rodríguez Sánchez 1984; Rico Callado 2015; Cobos Ruiz Adana 1976; Iglesias Ortega 2011. Sobre los delitos del clero diocesano: Candau Chacón 1993; Fernández García 1989; Pérez Muñoz 1992; Dubert 1996; Corbacho González 2016; Mancino y Romeo 2014; Saule 2014.

¹² En Lugo, por ejemplo, los imputados por dicha causa fueron el 24,4 % del total de procesados (Dubert 1996: 391). En Santiago de Compostela, más de un 40 % de los clérigos en el periodo 1650-1680 fueron tildados de incontinentes (Barreiro Mallón 1988).

carecemos de los expedientes relacionados con la actividad judicial de dicha institución o de las visitas. Hemos recurrido a las informaciones relativas a los desmanes de los beneficiados, realizadas a instancias de los provisos o que fueron el resultado de la iniciativa de los jueces capitulares. Hemos rastreado, asimismo, los expedientes judiciales conservados en el archivo diocesano de Salamanca, así como las referencias a disputas jurídicas o asuntos disciplinarios que aparecen en las actas del cabildo. Son de particular interés las alegaciones jurídicas reunidas o, en su caso, emanadas por los letrados de la institución, ya que permiten situar algunos de los problemas jurídicos más importantes. A este respecto, hemos de tener en cuenta que hacen referencia a problemas que se dieron en otros lugares de la Corona de Castilla y que afectaron, en buena medida, a la catedral de Salamanca. Como veremos a continuación, tiene un especial interés lo sucedido en la catedral de Astorga donde, a finales del siglo XVI, se produjo un duro enfrentamiento, en el que los adjuntos estuvieron en el centro de la polémica. Tanto la corporación como el prelado elaboraron sendos memoriales a los que recurriremos en las páginas siguientes.

En lo que respecta a la cuestión de la represión de las faltas, nos preguntamos, por otro lado, sobre la existencia de vías alternativas a la judicial. Las autoridades diocesanas dispusieron de procedimientos extrajudiciales para actuar contra los delincuentes. Esta realidad evidencia, en algunos casos, la existencia de una vertiente de la administración episcopal que podemos calificar como «pastoral», que implicó una forma de gobierno volcada más en la corrección que en el castigo.¹³ Planteamos la hipótesis de si dicha orientación pudo constituir una estrategia recurrente que supuso la utilización de instrumentos como las amonestaciones o la corrección fraterna. Esta última, por ejemplo, perseguía la erradicación de los crímenes ocultos que implicaban un daño para el que los cometía y se basaba, en buena medida, en la esperanza de la enmienda. Los correctivos eran adoptados en secreto y tenían un carácter arbitrario.¹⁴

1. LA NATURALEZA JURÍDICA DE LAS EXENCIONES DE LOS CABILDOS CATEDRALICIOS. DIMENSIONES

Hemos de definir, en primer lugar, las atribuciones jurisdiccionales de los cabildos. Para ello hay que partir de la diferencia que se estableció entre la potestad disciplinaria y la relativa a los delitos graves. Esta última se supeditó al obispo, como dejan entrever, por ejemplo, las constituciones aprobadas en Badajoz en 1500.¹⁵ En cambio, la represión de las faltas leves quedó en manos del capítulo. Entre ellas se contaron, particularmente, las agresiones, tanto físicas como verbales, que se produjeron entre los capitulares, siempre que no hubiese una herida o efusión de sangre. Otro tanto ocurrió en relación con los desacatos contra el cabildo.¹⁶ Esta autoridad incumbió, en todo caso, a los

desmanes cometidos en el recinto de la catedral e implicó la capacidad de imponer penas económicas.

En lo que respecta a los delitos graves de los beneficiados, en Trento se acordó que el obispo debía respetar la situación existente en aquellos cabildos donde existía la obligación de contar con dos jueces capitulares para juzgarlos. Estos eran los llamados adjuntos, que se nombraban, en principio, todos los años.¹⁷ Los prelados se reservaron el conocimiento de las causas de especial gravedad, como los crímenes de lesa majestad, la falsificación de moneda, el pecado nefando o las relaciones sexuales con monjas que implicasen el quebrantamiento de la clausura de un convento.¹⁸

Los «conjuces» limitaron la capacidad de acción de los obispos. En efecto, estos debían contar con ellos no solamente en la fase plenaria de los juicios, sino también para realizar informaciones sumarias o para adoptar medidas cautelares, como el encarcelamiento de los reos. Había, sin embargo, ciertos casos en los que dicha convocatoria podía obviarse, como demuestran algunos de los documentos jurídicos recogidos por el cabildo de Salamanca. La primera consistía en que la falta se contase entre las de carácter grave; la segunda circunstancia era que se temiese la fuga del delincuente.¹⁹ Asimismo, el ordinario no podía expedir monitorias en solitario, puesto que estas *vim habet libelli*. Esto se debía a que, si en los litigios civiles, ante la comparecencia del denunciado, un mandato de «comparendo» se resolvía en una simple citación, en las criminales, por el contrario, tenía graves consecuencias, puesto que podía implicar la condena.²⁰

En cuanto al lugar del encierro, cabe precisar que los cabildos defendieron que fuese digno.²¹ Por regla general, de acuerdo con la naturaleza de la falta y las consideraciones de los jueces, el encausado podía ser recluido en su domicilio o, más frecuentemente, en casa de otro beneficiado. En los casos más graves, el lugar de confinamiento era una prisión que los capitulares se esforzaron porque fuese la suya, excluyendo así la del obispo, que solía carecer de decoro suficiente.²²

Los prelados intentaron reducir las atribuciones de los adjuntos, a los que se esforzaron en convertir en simples asesores, carentes, en consecuencia, de poder de decisión. Uno de los fundamentos de esta interpretación se encuentra en el teólogo dominico Francisco Araujo. Este sostuvo

¹⁷ Barbosa 1639: 628. En caso de que no se hubiesen designado, el obispo podía proceder solo, advirtiendo de la necesidad de nombrarlos ("*dummodo illum prius moneat*") (*idem*).

¹⁸ Granado Hijelmo 2010.

¹⁹ Resoluciones jurídicas en el caso del procesamiento del canónigo Dezbach, canónigo de Mallorca en 1634. ACS. Cj. 24, lg. 1, nº 8, f. 31r. En Astorga, según la concordia propuesta por el cabildo en 1597, el obispo podía realizar una información sumaria y detener al delincuente sin contar con los adjuntos, siempre y cuando los convocase en el plazo de un día solamente en el caso de los delitos atroces, que eran aquellos donde se podían imponer la pena «corporal», consistente en la deposición o la degradación. Entre aquellos se incluía la incontinencia (Anónimo 1614: 13r).

²⁰ Resoluciones jurídicas en el caso del procesamiento del canónigo Dezbach, f. 3r-3v.

²¹ Ambas cuestiones fueron insistentemente defendidas por diferentes cabildos (Quintana Andrés 2001).

²² Disposiciones similares en el caso de Sevilla (Pineda 2015: 223 y ss.). Sobre las cárceles episcopales y su uso como medida de presión véase Rico Callado 2015: 413.

¹³ Marocchi 2009.

¹⁴ Anónimo s. f. (A); Pastore 2001.

¹⁵ Rico Callado 2015: 414-415. En Cuenca una de las razones de los conflictos entre el cabildo y el obispo Rafael Rairio (1493-1518) fue la intención de este último de conocer en solitario los delitos cometidos por los beneficiados (Díaz Ibáñez 1996: 840).

¹⁶ El caso de Calahorra en Marín 1948: 4-5. En Sevilla los indultos fueron frecuentes tras imponer una pena (Pineda 2015: 231).

que la jurisdicción residía únicamente en el obispo. Los adjuntos, por tanto, no podían exceder las funciones de *consilio et assensu*. Esto se confirmó con argumentos como que: "*iurisdictionis potestas solum est in superiore respectu subditorum*".²³ Por tanto, dado que no ejercían una potestad vicaria, que el prelado otorgaba a sus oficiales, dichos conjuces no eran los superiores del resto de beneficiados y, en consecuencia, no eran competentes para resolver sus causas.²⁴ De cualquier forma, Araujo reconoció que la legalidad de la labor del obispo dependía, de acuerdo con lo establecido en Trento, de la presencia de dichos acompañantes.²⁵ Los argumentos referidos sirvieron para que el prelado de Astorga, Antonio de Cáceres (1595-1615), discutiese las atribuciones judiciales de su cabildo catedralicio. En este sentido, afirmó que:

... los adjuntos del cabildo no tienen sobre el canónigo delincuente alguna jurisdicción nueva y añadida sobre la jurisdicción ordinaria del obispo, porque el Santo Concilio, cuando señaló adjuntos, no quiso hacer otro nuevo para el canónigo y lo que hizo, solamente, fue moderar y templar el fuero absoluto del obispo.²⁶

Esta postura se opuso a la interpretación que los capítulos castellanos hicieron de los ordenamientos canónicos. En primera instancia, alegaron en su favor la «posesión inmemorial», extremo que quisieron confirmar, entre otras cosas, con las concordias establecidas desde la Edad Media. Por tanto, recurrieron a las costumbres locales asentadas a lo largo de muchos años.²⁷

Los cabildos defendieron, asimismo, que su derecho de nombrar adjuntos derivaba de que ostentaban una jurisdicción concurrente, esto es, diferente de la del obispo. Esto implicaba, a partir de canonistas como Luis Sarabia, que no solamente aconsejaban, sino que tenían también poder decisorio.²⁸ Por esta razón, en caso de que el prelado renunciase a ejercer su potestad, esta recaería en exclusiva en los capitulares.²⁹ Otra de las pruebas alegadas en relación con esto fue que, para resolver los desacuerdos existentes entre el superior y los conjuces capitulares, era necesario nombrar un tercer magistrado, circunstancia que, de ser admitida, equiparaba las atribuciones de aquellos.³⁰

En relación con esto, cabe decir que el caso que sirvió de referente jurídico para los cabildos de la época se dio en Cuenca, donde el obispo Andrés Pacheco (1601-1622) procedió, durante la visita celebrada en 1614, contra el canónigo Juan de Ayerba por incontinencia. Los beneficiados recurrieron su auto de prisión, alegando que no contó con el acuerdo de los adjuntos. Para resolver el desacuerdo se nombró al titular de la sede de Albarracín, de cuya resolución, nuevamente, apelaron aquellos, defendiendo que el «tercero» o mediador debía ser uno de ellos. La afirmación de este derecho, reconocido finalmente en Roma, coartó las atribuciones episcopales en el ámbito de las visitas. Algunos juristas, sin embargo, sostuvieron que la institución abusó de su derecho de recurso, puesto que este se ejerció contra un decreto interlocutorio que no implicaba un daño irreparable. Asimismo, afirmaron que, en dichos trámites, el requerimiento del superior no podía tener carácter suspensivo, como concedió el nuncio en perjuicio de la autoridad episcopal.³¹

En Salamanca se detecta un caso similar, referido al juicio del deán José Raimundo Chiriboga, a quien se imputó la intervención en un matrimonio ilegal de un pariente. Al parecer, tras nombrarse como tercero al obispo de Ciudad Rodrigo, el prelado salmantino se negó a cumplir su resolución, de modo que los jueces capitulares reusaron firmar el auto correspondiente.³²

La problemática de los adjuntos incumbió también a las visitas. Los cabildos defendieron que en ellas también debían concurrir dichos magistrados, exigencia que conllevó enfrentamientos en algunos obispados.³³ El objetivo de los capitulares fue, sin duda, limitar el alcance de dichos trámites. A este respecto, reclamaron que los conjuces estuviesen presentes para imponer un encierro o recibir una información.³⁴ Esto ocurrió en Astorga donde, de acuerdo con una concordia que el cabildo propuso al obispo Antonio de Cáceres, la actuación en solitario del prelado no incluía ni la capacidad de «hacer información por escrito, ni prender, ni castigar, ni poner penas algunas, sino solamente corregir fraternalmente de palabra».³⁵

³¹ Archivo de la Universidad de Salamanca. Papeles varios, 30-96.

³² ACS, Actas capitulares, volumen 28, f. 888r. El cabildo de Cuenca consiguió, en varias ocasiones, que los nuncios confirmasen el derecho de que el tercero, en caso de desacuerdo entre conjuces y prelado, fuese uno de sus miembros. Así, por ejemplo, según el decreto de Francisco Cardinalis Querubino adoptado en 12 de agosto de 1651 (Biblioteca Nacional, ms./13357: 147r). Y lo mismo defendió el cabildo de Palencia pese a las quejas de los obispos de que, de ser así, se hacía «ilusoria su jurisdicción» (Valbuena s. f.: 8v).

A este respecto, es significativo que se plantease que la intitolación de los documentos judiciales debía incluir no solamente al provisor o el prelado, sino también a los adjuntos, quienes debían suscribirlos (Fernández Carrasco 2015).

³³ Como ocurrió la catedral de Calahorra (ACS, Cj. 24, lg. 1, nº 8). Este problema también se planteó en Teruel (Polo 2005: 39 y ss.). O en Palencia (Biblioteca de la Universidad de Valladolid, ms. 272, ff. 178 y ss.). Por el contrario, en Sevilla se estableció que el obispo podía visitar en solitario, si bien se llegó al acuerdo de que lo hiciese con dos miembros del cabildo, cuyas atribuciones, en todo caso, fueron limitadas (Anónimo s. f. (C): f. 4).

³⁴ Anónimo 1614: 28r.

³⁵ Anónimo 1614: 13vo. El Concilio tridentino autorizó a los obispos a realizar dicho trámite en solitario, con la excepción de las «concordias confirmadas *ex certa scientia* por la Silla Apostólica» (Biblioteca de la Universidad de Valladolid, ms. 272, ff. 178v-9r, también: f. 200v).

²³ Araujo 1654: 116.

²⁴ Araujo 1654: 117. «... el dar consejo y consentimiento no son de su naturaleza actos de juez y, la palabra «procederá», de que usa siempre el Concilio hablando del obispo.... por ser palabra que, esencialmente, dice jurisdicción, se pone siempre en singular, para que se vea que no habla el concilio con los adjuntos, sino con solo el obispo» (Anónimo s. f. (B): f. 19v). En este sentido, los comparaba a los asesores de los corregidores de capa y espada (*ibidem*: 20r).

²⁵ Araujo 1654: 117.

²⁶ Anónimo s. f. (B): 19v. Por el contrario, el capítulo defendió que tenía jurisdicción (Anónimo 1614: 41v).

²⁷ Práctica que fue habitual en otros contextos (Forrestal 2004: 76).

²⁸ Sarabia 1624: 79.

²⁹ *Ibidem*: 90-91.

³⁰ «si apud adiunctos non esset iurisdictionis, quomodo possent ipsi articulum super quo erat discordia terminare, quando tertius eis consensit?» (Sarabia 1624: 76). Este autor, asimismo, refirió otros hechos, como que los adjuntos, como otros jueces, prestaban juramento de servir bien a la justicia (*ibidem*: 76 y ss.). Los oponentes a dicha tesis discutieron que la elección de un tercero fuese una prueba de la existencia de una jurisdicción concurrente.

Ciertas personas vinculadas a las catedrales, como los capellanes de coro, quisieron acogerse al mismo fuero que los beneficiados, con el fin de templar, posiblemente, las condenas de la autoridad diocesana. Un buen ejemplo de ello es lo acontecido en Mondoñedo en 1586. El provisor de dicha diócesis, Isidro Caja de la Jara, procedió contra dos capellanes de la catedral encarcelándolos. La reacción del cabildo fue no solamente exigir que se convocase a los adjuntos, sino que, incluso, apeló tras afirmar que el proceso le competía en solitario, puesto que se trataba de una cuestión disciplinaria, esto es, acontecida en el seno de la catedral. El obispo negó esto último, basándose en que se trataba de un delito grave, esto es, la incontinencia. Por otro lado, negó que estos pudiesen acogerse al fuero de la catedral, puesto que no eran beneficiados. El auto favorable que el cabildo obtuvo de la Audiencia Real de Galicia, fue revocado por la Chancillería de Valladolid.³⁶

2. EL CABILDO DE SALAMANCA Y SU LUCHA EN DEFENSA DE LOS ADJUNTOS

Las problemáticas expuestas anteriormente afectaron, en mayor o menor medida al cabildo de Salamanca. Sin duda, la cuestión que suscitó los enfrentamientos más duros fue la salvaguarda de la jurisdicción capitular concurrente en los procesos más graves. Las primeras noticias sobre dicho conflicto se remontan al episcopado de Gonzalo Vivero (1447-1482). Conocemos las reivindicaciones de la corporación catedralicia a través de un interrogatorio propuesto por el canónigo Alfonso Gómez a los receptores nombrados por Antonio Jacobo de Ventrís, a la sazón obispo de León, juez árbitro que debía resolver las numerosas disputas surgidas entre los capitulares y el titular de la sede salmantina. En dicho escrito se aludió, en primer lugar, a que desde hacía treinta años o más, el obispo no podía proceder ni encarcelar a ningún beneficiado de la catedral sin la intervención del capítulo.³⁷ A este último le cabía la posibilidad de delegar dicha atribución en otra persona, alusión que debemos relacionar con la designación de los adjuntos. Esto se refería a las faltas graves, esto es, aquellas donde se podía imponer «cárcel perpetua, privación o deposición».³⁸ En cambio, la corporación asumió en solitario la sanción de las riñas habidas en la iglesia entre los beneficiados, así como los desacatos cometidos contra el cabildo.³⁹ Por otro lado, en dicho documento se aludió a una facultad que evidencia una potestad amplia, que contrasta con las restricciones que se impusieron en diferentes diócesis, referida a que las querellas sobre los delitos leves cometidos contra algún beneficiado debían ser remitidas al capítulo por el prelado. Finalmente, se refirieron las salvaguardas de las que gozaban los miembros de la institución en cuanto al lugar de la prisión.⁴⁰

Las disputas, como en otros lugares de la Península, se saldaron con un acuerdo entre las partes. En efecto, en 1497, durante el episcopado de fray Diego de Deza (1494-1498), se estableció una concordia donde se dispuso que el conocimiento de las causas criminales leves debía contar

con ambas partes. Particularmente, se insistió en que la cárcel debía ser la casa de otro beneficiado.⁴¹ Lo mismo rezaba para los delitos «graves e enormes», si bien, en este caso, la prisión debía ser la del obispo, aunque los reos debían estar separados del resto de los presos. En caso de negligencia de una de las partes, la causa debía ser seguida por la otra.⁴² A este respecto, resultan interesantes unos comentarios, de finales de los años treinta del siglo XVI, escritos por el representante de la corporación salmantina ante el nuncio. Este afirmó que, si el prelado se abstenía de corregir a un beneficiado, era el capítulo el que debía actuar unilateralmente, adoptando sanciones que incluían no solamente las penas pecuniarias, sino también el destierro o la prisión.⁴³

Debemos plantearnos cuál fue, en la práctica, la naturaleza de la autoridad disciplinaria concedida al cabildo. Si, en general, se aludió a su capacidad de imponer castigos pecuniarios, en ocasiones dicha facultad fue superada. En efecto, si, por regla general, los castigos adoptados consistieron en multas y, más frecuentemente, en privaciones de los beneficios económicos de la prebenda durante un cierto tiempo, en algunos casos se dictaron penas de prisión. Así, por ejemplo, tras la disputa que el arcediano de Salamanca y el canónigo Pereira tuvieron en enero de 1539, los implicados fueron condenados a un mes de prisión en sus casas.⁴⁴ A veces, dicho encierro llegó a tener un carácter infamante, de modo que el cabildo excedió, aparentemente, las sanciones económicas correspondientes a la corrección disciplinaria.⁴⁵

Como en otros lugares, el compromiso al que llegaron los capitulares salmantinos con el obispo Diego de Deza no zanjó las querellas. Durante el episcopado de Juan de Castilla (1498-1510) se vivió un periodo particularmente convulso. El origen del conflicto se encuentra en la oposición de aquellos a la visita de 1499. Incluso, hicieron un ejercicio de fuerza, recurriendo a sus clientelas armadas. El enfrentamiento alcanzó su punto álgido con el encarcelamiento del arcediano de Alba, Francisco Sánchez de Palenzuela.⁴⁶ Como represalia, el cabildo decretó la suspensión «a divinis» y abandonó la catedral, trasladando sus reuniones a la iglesia de San Cebrián. El destierro del deán, Álvaro de Paz, agudizó el conflicto en el que estuvo muy presente la cuestión de la intervención de los adjuntos en la corrección de los capitulares. El tribunal de la Rota anuló las actuaciones del obispo y le requirió para que actuase junto a los conjuces.⁴⁷ Para resolver este conflicto se buscó la mediación de la Corte. Al final del episcopado de Juan de Castilla, el capítulo pareció triunfar en sus pretensiones, si bien dicha victoria fue efímera.

Los problemas volvieron a reproducirse con virulencia en 1541, durante el episcopado de Rodrigo de Mendoza y

⁴¹ ACS, Cj. 14, lg. 2, nº 16-2º.

⁴² *Ídem*.

⁴³ ACS, Cj. 24, lg. 1, nº 50.

⁴⁴ Archivo Catedralicio de Salamanca (ACS), Actas capitulares, vol. 24, f. 409v.

⁴⁵ Así, por ejemplo, la corporación impuso una pena de seis meses de prisión (ADS, lg. 50, exp. nº 150, f. 173v). En septiembre de 1639 el sochantre Antonio Fernández fue condenado a dos meses en la torre de la catedral, de la que solamente se le autorizó a salir para cumplir sus obligaciones (ACS, Actas capitulares, volumen 28, f. 1116r). Un caso similar, relativo al cabildo sevillano, en Pineda 2015: 233.

⁴⁶ Vicente Baz 2016: 24-25.

⁴⁷ *Ídem*: 25-27 y también, *ibidem*: 28-29, de donde sacamos estas noticias.

³⁶ Archivo de la Chancillería de Valladolid. Ejecutorias, 1586, 47.

³⁷ ACS, Cj. 24, lg. 1, nº 28, ff. 4v-5r.

³⁸ *Ibidem*, f. 9v.

³⁹ *Ibidem*, ff. 8v-9r.

⁴⁰ *Ibidem*, f. 10v.

Manrique (1537-1545), evidenciando las tensiones acumuladas.⁴⁸ En febrero de dicho año fue procesado el canónigo Palenzuela por la agresión sufrida por Pedro de Villena. Si bien desconocemos la razón exacta de esta actuación, sabemos que uno de los criados de Palenzuela, llamado Campos, hirió a Villena con una daga en la frente, justo encima de un ojo.⁴⁹ El provisor ordenó que el notario del cabildo, Bernardo de Soria, le proporcionase los autos que se habían adoptado en razón de dicha falta. Como respuesta, Bernardo apeló del mandamiento de dicho juez, quien lo mandó prender. Mientras este estaba en la cárcel, el mayordomo del obispo, Tomás de Mata, dispuso que Pedro de Guitar quien, a la sazón, era fiscal de la audiencia episcopal, fuese a casa de Bernardo de Soria para incautarse de los documentos. Cuando Bernardo se encontraba allí, una hermana de Soria fue a avisar a los beneficiados. El vicedeán y otras dignidades, entre las que se encontraban los arcedianos de Ledesma y de Morillo, así como los canónigos Palenzuela, Vera y Lobera y el racionero Muñón se presentaron en dicho lugar y apresaron a Guitar quien, pese a requerirles para que lo dejaran en libertad, argumentando que era estudiante, fue maltratado y llevado a la cárcel del maestrescuela.⁵⁰ Cuando el corregidor instó a que los capitulares desistiesen de su actitud, aquel reaccionó convocando a los estudiantes para que se armasen y viniesen a su casa. Asimismo, el maestrescuela liberó a varios presos de su cárcel para que acudiesen en ayuda del cabildo.⁵¹ Los beneficiados, a su vez, contaron con el auxilio de sus criados, como Pedro, el «negro» del racionero Pedro Catalán, a quien algunos testigos vieron en la catedral con una rodela y una espada, además de un casco.⁵² El obispo recibió una cédula del rey para que el corregidor lo amparase en la detención de quienes provocaron el altercado.

Los episodios referidos constituyeron el preámbulo de nuevas complicaciones. En marzo del mismo año, se inició la causa contra Alonso Gómez Muñón por cometer un desacato con el provisor, quien ordenó su encarcelamiento. Si bien el capítulo nombró dos adjuntos, el obispo negó la validez de dicha designación y afirmó que solamente la aceptaría si aquel probaba su derecho.⁵³ Para afirmar la posición del prelado, el fiscal diocesano redactó una alegación donde negó que los prelados salmantinos hubiesen consentido la colaboración de dichos oficiales en el pasado. Afirmó, incluso, que el capítulo perdió sus supuestos derechos, tras haber abusado de ellos. Asimismo, planteó dos problemas. Por un lado, expuso que, dado que la prisión era un acto «preparatorio del juicio» se podía decretar dicha medida cuando un delincuente era hallado *in fraganti*. Por otro lado, defendió que las inhibiciones ganadas por el cabildo en Roma en casos anteriores no eran válidas. En este sentido, afirmó que los obispos habían

prendido en solitario a los capitulares sin contar con aquel, como hizo Juan de Castilla en su momento y como aconteció, poco tiempo antes, con el canónigo Bautista Cabredo.⁵⁴

Por lo que se refiere a este último, conservamos la información sumaria de su caso y algunas de las alegaciones que se hicieron. Cabredo era uno de los «hijos del chantre» y, junto a su hermano, Evangelista Cabredo, y un criado llamado Rejón, fue procesado en 1539 por agredir a Rosiñol, clérigo de Córdoba, residente en la ciudad. El abogado del primero, que fue apresado por el provisor, alegó la posesión inmemorial para discutir que se adoptase dicha medida sin contar con los adjuntos.⁵⁵ Tras obtener un auto favorable, dicho letrado recurrió de nuevo, denunciando que la información se realizó sin ellos.⁵⁶ No conocemos la sentencia de este proceso, circunstancia que puede deberse, con toda probabilidad, a una composición extrajudicial entre las partes. Un indicio significativo a este respecto es que Rosiñol desistiese de su querrela e hiciese manifiesta su intención de reconciliarse con su agresor.⁵⁷

Paralelamente, en el pleito de Muñón, al que hemos aludido anteriormente, el cabildo defendió la tesis de que dispuso de unas atribuciones que podemos calificar como amplias. En este sentido, afirmó que podía actuar, sin contar con el obispo, contra los medios racioneros si cometían un delito contra personas que no perteneciesen a la catedral. Algunos testigos de la información dijeron conocer esto.⁵⁸ Por tanto, a principios de los años cuarenta, las dos partes enfrentadas defendieron que gozaban, en la práctica, de unos poderes que no recogieron los acuerdos precedentes.

Para solucionar los problemas mencionados, el capítulo salmantino designó a varios de sus miembros para discutir un convenio con Rodrigo de Mendoza y Manrique. El pacto al que se llegó confirmó, con ciertas precisiones, lo establecido anteriormente. Se instituyó que ambas partes debían determinar, con el juicio de letrados, cuáles eran los delitos graves y enormes, así como los que «se tengan por leves». Por otro lado, el conocimiento colegiado no siempre era efectivo. En lo que respecta a los delitos que se produjesen durante las reuniones del cabildo, o cuando este se encontraba en el coro, si el prelado o su provisor estaban ausentes y renunciaban a reunirse con los conjuces tras ser convocados, la corporación podía actuar unilateralmente.⁶⁰ Frente a esto, como demuestran las actas capitulares, la corporación retuvo el monopolio de la potestad disciplinaria. Finalmente, se reguló el procedimiento de elección de un tercero en caso de que no hubiese acuerdo entre el obispo o su representante y los adjuntos.

Posteriormente, ante la promulgación de los decretos conciliares, la corporación adoptó ciertas precauciones. El 9 de agosto de 1564 presentó una protesta ante el obispo Pedro González de Mendoza, afirmando que era necesario concretar cómo se iban a aplicar varios decretos. Por esta razón, solicitó que se nombrasen «personas del cabildo, e

⁴⁸ El cabildo continuó, de cualquier forma, defendiendo celosamente sus atribuciones. En 24 de julio de 1531 nombró a varios de sus miembros para que se entrevistasen con el obispo, Luis Cabeza, para averiguar si tenía preso al canónigo Beltrán en su residencia. Tanto este último como dicho prelado negaron dicho extremo. Sin embargo, unas semanas más tarde, el provisor solicitó al cabildo que interviniese, junto a él, en un delito cometido por este último (21 de agosto de 1531) (ACS, Actas capitulares, vol. nº 26, ff. 506r y 508v).

⁴⁹ ACS, Cj. 24, lg. 1, nº 53, ff. 16r-v.

⁵⁰ ACS, Cj. 28, lg. 1, nº 61, ff. 14r-16r, f. 82v.

⁵¹ *Ibidem*, f. 83r.

⁵² ACS, Cj. 24, lg. 1, nº 55, ff. 25v-26r.

⁵³ ACS, Cj. 24, lg. 1, nº 53, ff. 46v-47r.

⁵⁴ *Ibidem*, ff. 57v-58r.

⁵⁵ ACS, Cj. 24-, lg. 1, nº 5, f. 17v.

⁵⁶ ACS, Cj. 24, lg. 1, nº 5, f. 19r.

⁵⁷ ACS, Cj. 24 lg. 1, nº 5, f. 28r. Estos acuerdos fueron habituales: Mantecón Movellán 2002.

⁵⁸ ACS, Cj. 24, lg. 1, nº 53, f. 12v.

⁵⁹ ACS, Cj. 14, lg. 2, nº 16, doc. 2, f. 10v.

⁶⁰ ACS, Cj. 24, lg. 1, nº 48, f. 11r.

fuera del cabildo, para que con vuestra señoría lo traten y comuniquen».⁶¹ Anteriormente, en marzo de dicho año, la corporación nombró a varios de sus miembros para discutir dichas cuestiones con su prelado, si bien desconocemos el resultado de dichas negociaciones.⁶²

Tras la promulgación de Trento, los enfrentamientos en torno a los adjuntos se calmaron y las polémicas puntuales no alcanzaron la virulencia de las que hemos descrito anteriormente.⁶³ A este respecto, hemos de referir las disputas originadas por las visitas que el obispo hizo al cabildo. Podemos citar los comentarios de algunos juristas sobre la visita que pretendió hacer don Luis de Córdoba en 1605 en Salamanca. La corporación puso en juego varios obstáculos, planteados en ocasiones similares en otros lugares, cuyo objetivo era dar una mayor opacidad a dicha tarea. Así, por ejemplo, exigió que los edictos se publicasen solamente en la catedral, disposición que perseguía que no llegasen a noticia de algunos vecinos.⁶⁴ Por otro lado, se estableció que los trámites habían de realizarse en el templo, donde debían tomarse las declaraciones. En cuanto a las sanciones, no debían imponerse penas ordinarias, incluso en aquellos casos donde el delito fuese notorio. Esto se justificó a partir del presupuesto de que el objetivo de la visita era la enmienda y no el castigo.⁶⁵ Finalmente, el capítulo salmantino, como otros, quiso que el obispo no acudiese a ella con un notario, cosa que consiguió que se hiciese efectiva en algunas fases del procedimiento.⁶⁶

Coincidiendo con lo acontecido en otros lugares, otro asunto polémico tuvo que ver con la pretensión de algunos cantores de la catedral de gozar de las mismas prerrogativas procesales que los beneficiados. De este modo, José García, un tiple del coro, compareció ante el cabildo el 27 de octubre de 1637 y dijo que el provisor actuaba contra él sin contar con los conjuces, por no estar ordenado, a lo que opuso el hecho de que, en casos similares, estos habían intervenido. El capítulo nombró a uno de sus miembros para tratar la cuestión con el provisor.⁶⁷

3. LA DISCIPLINA EN EL SENO DE LA CATEDRAL

Las agresiones de Rosiñol y Pedro de Villena, así como los disturbios ocasionados con ocasión del apresamiento de Guitar revelan la agresividad de los capitulares y la adopción, por parte de ellos, de comportamientos violentos.⁶⁸

⁶¹ ACS, Cj. 24, lg. 1, nº 65.

⁶² ACS, Actas capitulares, vol. 26, ff. 404 y 414.

⁶³ En 1591 el obispo Jerónimo Manrique de Figueroa actuó, sin contar con los adjuntos, contra el canónigo Pedro de Saucedo. El cabildo requirió el cumplimiento de la normativa tridentina (ACS, Actas capitulares, vol. 32, f. 55v).

⁶⁴ ACS, Cj. 24, lg. 3, nº 45, f. 31r, f. 29r

⁶⁵ *Ibidem*, f. 23r.

⁶⁶ *Ibidem*, f. 41r. En ocasiones, los obispos se vieron obligados a tomar nota de la visita de propia su mano (Ribeiro da Silva 2013: 64).

⁶⁷ ACS, Actas capitulares, libro 28, f. 928v. Una visión sobre la cuestión en Barbosa 1639: 631-634.

⁶⁸ La agresión totalmente gratuita, a la luz de la información, de Rosiñol recuerda la presencia de la violencia grupal, y más lejanamente, la de los bandos en los núcleos urbanos, y los coletazos de una sociedad turbulenta, donde los clérigos participaron acompañados de sirvientes armados (Sánchez Benito 2012: particularmente 257; Lop Otín y López Gómez 2015). Sobre los bandos en Salamanca y la violencia en el siglo XV véase el trabajo de Monsalvo 2009.

Esto contrasta con las medidas adoptadas por los obispos para eliminar dichas actitudes, que se promulgaron a través de mandamientos y sínodos. El proceso de profesionalización del clero, que implicó la imposición de una serie de pautas de comportamiento y, particularmente, la erradicación de las actitudes violentas. A este respecto, es reveladora la insistencia en la eliminación de las armas de los usos cotidianos de los clérigos.⁶⁹

Las constituciones del cabildo de Salamanca se hicieron eco, tempranamente, de las medidas dirigidas a la reforma de las costumbres de sus miembros, cosa que incumbió a cuestiones como las vestiduras, el cumplimiento de las obligaciones pastorales o la residencia.⁷⁰ Asimismo, en octubre de 1513 la institución confirmó una constitución referida a la prohibición de que los beneficiados introdujesen, bajo «certainas penas», armas ofensivas en la iglesia y, particularmente, en lugares como el coro, las reuniones capitulares o el altar.⁷¹

Esto fue contradicho por el arcediano de Alba, Francisco Sánchez de Palenzuela, quien afirmó que necesitaba armas para defenderse y que estaba dispuesto a prestar la fianza correspondiente. Por su parte, el canónigo Francisco de Salamanca y el racionero Bobadilla, evidenciaron un error de procedimiento que invalidaba dicho estatuto, manifestando que, para aprobarlo, habían de ser convocados todos los beneficiados que estuviesen en la ciudad. Estos defendieron, asimismo, que dicho reglamento perjudicaba a los miembros menos pudientes de la corporación, ya que las dignidades y algunos canónigos seguirían disponiendo de «sus criados e pajes con las dichas armas, lo que no traían los menores y, por esta razón, lo contradijeron».⁷²

Pese a estas disposiciones, los abusos continuaron. Así, por ejemplo, el 6 de septiembre de 1514, se dio comisión a dos capitulares para aclarar lo sucedido entre el tesorero y el capellán Diego Marín, episodio que evidencia una violación de la prohibición de que tanto los beneficiados como sus criados fuesen armados en la catedral.⁷³

Otro suceso, acontecido en 1532, revela, nuevamente, que los beneficiados siguieron incumpliendo la normativa descrita y que, en cierta medida, delegaron el ejercicio de la violencia en sus sirvientes. El 4 de diciembre de dicho año, el arcediano de Alba y el canónigo Martín Burgos discutieron en el claustro sobre ciertas cosas que este había traído de una feria para el arcediano. Este último echó en cara a Burgos que: «andáys diciendo que os faltó la palabra», a lo que repuso el aludido que era cierto «que me la faltaste». Como respuesta, el arcediano dio a Burgos una bofetada. Esto aconteció ante varias personas, cuyos testimonios permiten reconstruir los detalles del suceso. Algunos de ellos afirmaron que, tanto el arcediano como sus criados, iban desarmados.⁷⁴ En cambio, Juan Pérez del Portal, criado del canónigo Pero Hernández de Toro, manifestó que los lacayos

⁶⁹ Como demuestra el edicto del obispo Luis Cabeza de Vaca, promulgado en 11 de octubre de 1533, relativo a la reforma de las costumbres y dirigido al clero diocesano (ACS, Cj. 24, lg. 1, nº 42).

⁷⁰ Constituciones 1573, particularmente el libro III.

⁷¹ ACS, Cj. 30, nº 16: con fecha 20 de octubre de 1513. La pena para los contraventores fue la del descuento de la «ración y aniversario» por un mes entero sin remisión, cosa que tuvo el rango de «ley y estatuto» (*ibidem*, ff. 17r-v). En el mismo sentido, ACS, Cj. 30, nº 7.

⁷² ACS, Cj. 30, nº 16, f. 18v.

⁷³ ACS, Actas capitulares, vol. nº 25, f. 200r.

⁷⁴ ACS, Cj. 24, lg. 1, nº 5, f. 2r.

del arcediano tenían espadas.⁷⁵ El racionero Veloarte, por otro lado, vio que, cuando el racionero Muñón intervino, el de Alba alzó el brazo y dio otro puñetazo o bofetada al canónigo. Asimismo, refirió que lo insultó, llamándole: «puto judío, que me digáis vos que falté yo mi palabra». Tras decir esto, apeló a los suyos para pedirles una espada y uno de sus servidores echó mano a la que llevaba, aunque no llegó a desenvainarla. El arcediano amenazó de muerte a quien dijese que no cumplía con su palabra.⁷⁶ El racionero Covarrubias, que estaba en la contaduría, precisó que el arcediano buscó el encuentro y que, para ello, encargó a uno de sus sirvientes que le avisase de la llegada de Burgos. Dicho testigo dijo también que vio cómo el de Alba apeló a uno de sus sirvientes diciéndole: «mátalo, mátalo a este ladrón».⁷⁷

Tras el Concilio de Trento, algunos canónigos utilizaron al servicio para realizar ataques violentos, si bien lo hicieron de una manera más disimulada. En 1616 el canónigo doctoral, don Roque de Vergas denunció un atentado contra su persona, que atribuyó al arcediano de Alba, Francisco de Paz. Para situar esta cuestión hemos de tener en cuenta la enemistad existente entre ambos. Al parecer, Francisco de Paz tuvo diferencias legales con el cabildo y el doctoral fue el encargado de actuar como abogado de este último en los pleitos que se siguieron entre ambas partes. De Paz no solamente se quejó de las acciones de Vergas sino que, incluso, presentó ante el juez delegado del nuncio, Pedro de Soria, una petición en su contra, llena de injurias, que dicho magistrado rompió, ordenando que cesase en sus difamaciones.⁷⁸

Antes de la agresión que dicho canónigo calificó como intento de asesinato, sus bienes sufrieron los ataques de los criados del arcediano quienes, por ejemplo, hirieron a sus caballos o le robaron.⁷⁹ Esto aconteció en Valladolid, por lo que Vergas pidió al cabildo que lo sustituyese.⁸⁰ Tras recibir amenazas de muerte por parte del de Alba, una noche de agosto, cuando estaba en Madrid, siguiendo trámites en contra de este, Vergas fue agredido por tres hombres embozados que lo hirieron en la cabeza y en una mano. Afirmó que, si se salvó de una muerte segura, fue gracias a que algunos vecinos acudieron en su auxilio, tras oír los gritos de una muchacha.⁸¹ En el interrogatorio que propuso al juez, el canónigo doctoral señaló como sospechosos a los criados de Francisco de Paz, a quienes apresó el corregidor.⁸² Entre los implicados estuvo también Pedro García de Llerena, quien era paje de espada del sobrino de Francisco de Paz, Alonso de Paz, y que era tenido por «hombre valiente». Asimismo, se contó entre los cómplices Francisco Gutiérrez, quien había estado preso varias veces por tratos con mujeres y cuchilladas. Este último fue advertido por el mayordomo del arcediano de Alba, Juan Leal, y se refugió en la casa del embajador de Inglaterra.⁸³

Por otro lado, los capellanes de coro o los racioneros siguieron utilizando con frecuencia armas. En 1624 el

racionero Herrera fue procesado por golpear al organista Santiago Tamayo en la catedral mientras este tocaba el órgano en vísperas. La información deja entrever que portaba una daga.⁸⁴ En 1639, el racionero Bartolomé de Nájera fue acusado de asaltar al ministril Juan de la Fuente con una espada que este último llevaba.⁸⁵ Un caso interesante es el de don Rodrigo de Aguilera, regidor de la ciudad, quien fue acusado de agredir al racionero Gaspar de Prada. Al parecer, ambos se desafiaron tras la procesión del Rosario que se realizó a principios de julio de 1638 en el monasterio de San Esteban. A continuación, se fueron a la casa del racionero, donde se encerraron en un aposento que estaba en la parte alta y se batieron con espadas. De resultas de ello, Gaspar fue herido en un ojo.⁸⁶ Pese a que este contravino la normativa sinodal no fue, que sepamos, juzgado por ello.

Aunque carecemos de una recensión completa de las causas disciplinarias del personal de la catedral desde finales del siglo XVI da la impresión, a partir de los datos de los que disponemos, de que los implicados en las agresiones fueron, principalmente, racioneros u otros oficiales, como los capellanes de coro.⁸⁷ Los canónigos parecen haber adoptado, en general, una actitud más moderada que en épocas anteriores. La vida desarreglada de algunos mozos de coro o capellanes trasciende en algunos procesos, como el que se siguió contra Antonio Ramos quien, junto al criado del arcediano de Ledesma, Pedro García, fue agredido una noche por unos estudiantes con un montante, cuando salió a cantar coplas por la ciudad.⁸⁸ Unos años más tarde, en 1611, el capellán Juan Fernández descalabró a otro miembro de coro, llamado Juan Pérez, tras una discusión.⁸⁹

Por otro lado, el 11 de noviembre de 1649 el maestro de capilla Andrés Barea fue agredido por el mediorracionero Fernando de Herrera con un palo en la catedral. Esto se produjo tras el ataque que el tío de Fernando, el organista Rodrigo Fernando de Herrera, sufrió a manos del citado Barea.⁹⁰ Al parecer, este pidió a Rodrigo explicaciones por unas palabras que dijo sobre él en un cabildo. Pese a que el músico le pidió excusas y dijo que todo se debía a una confusión, recibió un puñetazo de Barea en el rostro. El cabildo imputó a Herrera que había actuado con premeditación. Este último recurrió dicha decisión ante el obispo, alegando que la corporación no había convocado al provisor para procesarlo.⁹¹

En 1665 los racioneros Antonio de Castro y Juan Domínguez se enfrentaron en una de las capillas de la universidad con el sochantre Andrés Ramos, quien les dio una orden durante la celebración de unos oficios. Domínguez, particularmente, puso en solfa la autoridad de este último, diciendo que le faltaba autoridad, puesto que acababa de obtener su cargo. Tras esto, Ramos les acusó de aguardarle armados una noche, junto a su casa, con la intención de agredirle.⁹²

⁷⁵ *Ibidem*, f. 3r.

⁷⁶ *Ibidem*, f. 11v.

⁷⁷ *Ibidem*, f. 14v.

⁷⁸ ACS, Cj. 28, lg. 1, nº 20, f. 1v.

⁷⁹ ACS, Cj. 28, lg. 1, nº 20, f. 2r

⁸⁰ *Ibidem*, f. 2r.

⁸¹ *Ibidem*, f. 3r.

⁸² *Ibidem*, f. 5r.

⁸³ El cabildo intentó mediar en esta cuestión, requiriendo la ayuda del obispo. Ante la negativa del arcediano de Alba, la iniciativa de este último no tuvo éxito (ACS, Actas capitulares, libro 34, f. 13r).

⁸⁴ ADS, lg. 25, exp. nº 15.

⁸⁵ ADS, lg. 40, exp. nº 56.

⁸⁶ ADS, lg. 39, exp. nº 132.

⁸⁷ Véase, por ejemplo, la recopilación de causas disciplinarias en ACS, Cj. 28, lg. 1, nº 45, correspondientes a finales del siglo XVI y principios de la centuria siguiente.

⁸⁸ ADS, lg. 6, exp. nº 70.

⁸⁹ ADS, lg. 12, exp. nº 7.

⁹⁰ ACS, Actas capitulares, vol. 37, ff. 166v-167r.

⁹¹ ADS, lg. 50, exp. nº 150.

⁹² ADS, lg. 65, exp. nº 64.

Aunque los miembros más destacados del capítulo se alejaron de la tónica descrita, uno de ellos, el arcediano de Salamanca, Roque Ruiz Barrios, destacó por su carácter conflictivo. Entre otras cosas, fue imputado en 1650 por posesión de armas en su casa.

Con anterioridad a esta causa fue juzgado en otras ocasiones. El primer encontronazo que podemos documentar con la autoridad episcopal se produjo en 1636. Tras ser excomulgado por una deuda a instancias de un canónigo llamado Almansa, una mañana Barrios dijo a dicho beneficiado que iba a oír misa y que, si quería, podía enviar testigos para pedir justicia al obispo. La información, donde se procedió con los adjuntos, confirmó que oyó misa en la iglesia de Santo Domingo y se le dio como prisión su casa. Pese a la gravedad del hecho imputado no nos consta que se le condenase.⁹³

Una de las razones por las que Roque pudo cometer el acto referido puede encontrarse en el hecho de que los cabildos consideraron ilegales las excomuniones decretadas unilateralmente por los obispos, esto es, sin contar con los adjuntos.⁹⁴ La excomunión fue, sin duda, uno de los instrumentos disciplinarios más importantes de los que dispusieron los jueces eclesiásticos,⁹⁵ de modo que dicha exigencia supuso una limitación a su acción.

Los desacatos de Roque en este ámbito se documentan en otras ocasiones. En septiembre de 1649, el fiscal de la audiencia denunció que el arcediano agredió al cursor Juan Jiménez cuando fue a notificarle un mandamiento para que pagase unas deudas acumuladas en un proceso. Estos escritos solían portar en su tenor una cláusula penal referida a la excomunión, circunstancia que revela que Roque no se arredró, posiblemente, ante dicha amenaza.⁹⁶ El mismo año, tras estar preso en la torre de la catedral salmantina, fue traslado a casa de su hermano, Antonio Barrios, donde se le ordenó que permaneciese bajo pena de excomunión. El 15 de marzo el fiscal denunció que había quebrantado dicha orden, paseándose descaradamente por la ciudad.⁹⁷

En enero de 1637 Roque fue procesado de nuevo. La noche de Reyes de ese año, cuando el obispo Cristóbal de Cámara llegó a la catedral para celebrar los oficios, Roque no bajó de su silla para recibirle. Tras la ceremonia, hubo otro incidente en la calle, donde los sirvientes del arcediano se mezclaron entre los capitulares y pajes que acompañaban al prelado. Este convocó a los adjuntos para castigarlo y Roque fue condenado a permanecer seis meses fuera del cabildo.⁹⁸

Para entender este desacato y otros posteriores hemos de recurrir a un documento que contiene la defensa que el capítulo salmantino hizo de Roque Ruiz.⁹⁹ En él se alude a la animadversión que le tenía el provisor, quien libró varios pleitos en su contra, particularmente uno referido a la provisión

del beneficio de la parroquia de San Isidro de Salamanca.¹⁰⁰ A este respecto, un memorial, dirigido al cabildo el 13 de febrero de 1637, con la intención de que este mediase ante Cristóbal de Cámara, revela las causas por las que Roque consideraba que sus derechos habían sido menoscabados por dicho prelado. En él refirió que, en meses ordinarios, le tocaba la provisión de todos los beneficios que vacaban en la «abadía» y ciudad de Salamanca, así como en los arciprestazgos de Armuña, Peña de Rey, Valdevilloria y en los anejos correspondientes. Afirmó que dicho derecho había sido reconocido en concordias anteriores y que los obispos lo habían respetado hasta ese momento. Dicha atribución, además, obtuvo la aprobación apostólica. Por esta razón, se suscitaron pleitos entre el titular del obispado (1638) y el arcediano en los que medió el cabildo, sin que sepamos el resultado de sus gestiones.¹⁰¹ Lo cierto es que el conflicto continuó, como revela un documento de 15 de noviembre de 1638, donde se precisaron mejor las pretensiones de Roque. Junto a la provisión de beneficios simples y curados citados anteriormente, aspiraba a que se le respetase la atribución de conceder las ermitas de sus distritos y, consecuentemente, otorgar sus títulos. Además, pretendía visitarlas, de acuerdo con las constituciones sinodales otorgadas en la época de Jerónimo Manrique.¹⁰² Finalmente, intentó reafirmar su potestad de regir las procesiones y penar las parroquias que faltaban a ellas. Los problemas se prolongaron, puesto que el 13 de enero de 1639 Roque compareció ante el superior para pedirle el cumplimiento de sus derechos.¹⁰³

La tensión fue en aumento. El 17 de mayo el cabildo nombró adjuntos para conocer la causa contra Roque por haber acudido a la justicia real para que compeliere a un notario, durante la celebración de un sínodo, para que le entregase los «autos secretos» que el obispo seguía en su contra.¹⁰⁴ En este encuentro, además, el arcediano defendió su prerrogativa de sentarse a la derecha del prelado. Por todo ello, este pidió al capítulo que el arcediano no asistiese a la procesión del Corpus, de cuyo gobierno era uno de los encargados. Frente a dicha demanda la corporación decidió por mayoría que cumplierse dicha labor.¹⁰⁵

La celebración de dicho acontecimiento en junio de 1638 sirvió de nuevo escenario para la pugna. Hemos de tener en cuenta que en las ceremonias públicas se escenificaron los enfrentamientos jurisdiccionales entre corporaciones capitulares y sus obispos. Esta es una cuestión que está a la espera de estudios más profundos.¹⁰⁶ Esto ocurrió, particularmente, en las procesiones u otros actos solemnes. En

¹⁰⁰ Sabemos que se siguió un pleito al respecto en la audiencia episcopal en la primavera de 1628 (ACS, Actas capitulares, volumen 28, f. 995v) que, al parecer, se apeló a la Chancillería de Valladolid.

¹⁰¹ ACS, Cj. 28, lg. 1, nº 23, doc. 3.

¹⁰² ACS, Cj. 28, lg. 1, nº 23, doc. 2, f. 193.

¹⁰³ ACS, Cj. 28, lg. 2, nº 6.

¹⁰⁴ ACS, Actas capitulares, volumen 28, f. 996.

¹⁰⁵ ACS, Actas capitulares, volumen 28, f. 1001v. 3 de junio de 1638.

¹⁰⁶ Forrestal 2004: 76-77; Egido López 2000. Se ha prestado más atención a los conflictos con las autoridades locales, como los concejos que a los que se produjeron con los prelados: Sánchez Rodríguez 2004; Suárez Golán 2011. Sobre las fiestas en Salamanca en la Edad Moderna y, particularmente, el Corpus, véase Lorenzo Pinar 2010. Una aproximación a esta cuestión en el caso de Portugal en: Ribeiro da Silva 2013: 165-204.

⁹³ ADS, lg. 37, exp. nº 206.

⁹⁴ ACS, Cj. 28, lg. 2, nº 27. Algo similar se documenta en otros casos, como en el del racionero e la catedral de Lima Pedro Mauricio González (Coello de la Rosa 2011).

⁹⁵ Rico Callado 2014b.

⁹⁶ ADS, lg. 51, exp. nº 24, f. 40r. Rico Callado 2014a: 153. Las constituciones sinodales de la época criticaron el abuso que hicieron los jueces de dicha censura, incluso en casos de escasa entidad: Rico Callado 2014b: 292.

⁹⁷ *Ibidem*, f. 37r.

⁹⁸ ACS, Actas capitulares, volumen 28, f. 847r.

⁹⁹ ADS, lg. 39, exp. nº 111, f. 2r.

Astorga, por ejemplo, hubo disputas respecto al lugar que debía ocupar el obispo Antonio de Cáceres, de acuerdo con las innovaciones del ceremonial romano.¹⁰⁷

Tenemos dos versiones opuestas del suceso referido. Al parecer un presbítero que acompañaba a Roque para controlar la procesión, llamado Cristóbal Aragón, teniente de cura en la parroquia de San Isidro de Salamanca, contravino la normativa, dado que iba vestido con sobrepelliz. Además, dicho clérigo quebrantó la orden de que los miembros de cada una de las parroquias y cofradías acompañasen a las enseñas o cruces que las identificaban. Por dichas razones, el provisor encargó a dos subordinados que le conminasen a que dejase de regir la procesión, cosa que Aragón dijo haber obedecido. Esto se contradice con la versión del provisor quien expuso que, tras amenazar a Aragón con llevarlo a la cárcel si incumplía sus mandatos, el arcediano intervino en su favor. Este dijo que estaba enfermo y que, por tanto, dicho oficial no podía ser prendido. Ante la insistencia del provisor y la amenaza de que también lo encarcelaría, Roque porfió, afirmando que era él quien podía penar a quinientos ducados y que tenía más jurisdicción que dicho juez e, incluso, que el propio obispo en la procesión.¹⁰⁸ A raíz de ello, ambos forcejearon y Ruiz invocó la ayuda del cabildo, de modo que varias personas vinculadas a la catedral se lo llevaron por la fuerza. Esta versión fue refrendada por varios testigos quienes, además, aseguraron que algunos sirvientes del arcediano cometieron desacato, de modo que no se quitaron sus sombreros al ver al provisor, quien salió en busca de su superior para comunicarle lo acontecido.¹⁰⁹

4. LA REPRESIÓN DE LA INCONTINENCIA

Hay noticias sobre la existencia de casos de incontinen- cia, de gravedad desigual, tanto antes como después del Concilio en diferentes capítulos catedralicios de la Península. En Portugal, por ejemplo, algunos cabildos apelaron al concilio Provincial de Braga de 1566 para defender el derecho a educar a sus hijos. A finales del siglo XVI no fue raro que los beneficiados viviesen con estos y sus amantes.¹¹⁰ En Coria, por otro lado, se suscitó un escándalo sexual mayúsculo a este respecto.¹¹¹ Sin embargo, en Salamanca, como en otros lugares, tenemos pocas referencias sobre los delitos contra el celibato cometidos por los capitulares.

Tras el Concilio de Trento algunos obispos denunciaron la inmoralidad de sus capitulares. En Astorga, por ejemplo, el prelado manifestó que buena parte de sus miembros estaban amancebados. En todo caso, desconocemos si dichas acusaciones eran fundadas. A este respecto, resulta interesante un memorial presentado en Roma que se atribuyó a Plácido Tosantos. Como es bien sabido, este fue enviado por Felipe III en 1617 como embajador ante la Santa Sede para actuar en defensa de la Inmaculada Concepción.¹¹²

Los cabildos reaccionaron airadamente contra dicho escrito que tildaron de «libelo infamatorio». En él se aludió a los pecados de incontinen- cia cometidos por beneficiados de diferentes diócesis y, como remedio, se propuso que se suprimiesen las atribuciones judiciales de dichas instituciones. Frente a ello, una de las dignidades de la corporación salmantina, el arcediano de Monleón, aludió a que dichos errores «habían cesado en todas partes» y, si en algún lugar había problemas, los prelados no se podían excusar, puesto que podían proceder contra los capitulares sin la intervención de adjuntos y, una vez presos estos, podían adoptar las disposiciones oportunas. Esto podían hacerlo, incluso, con la oposición de aquellos, a la espera de que un superior las revocase.¹¹³

Frente a esta denuncia, hemos de decir que, buena parte de las faltas de los miembros de los cabildos que podemos documentar, consistieron en desacatos, insultos y agresiones físicas. Como hemos dicho, sabemos poco sobre los delitos sexuales. A partir de esto se podría deducir, en lo que respecta a la incontinen- cia, que el clero catedralicio se alejó de las inclinaciones habituales entre los delincuentes pertenecientes al clero parroquial.

Frente a esta impresión, hay que tener en cuenta ciertos presupuestos procesales vigentes en la época que estudiamos. La incoación de un proceso estaba supeditada a la existencia de la fama, que determinaba que un delito era público.¹¹⁴ Sin embargo, la verificación de dicho extremo no necesariamente implicaba que se siguiese una causa. En efecto, en el caso de la incontinen- cia de los clérigos se estableció que había que proceder con prudencia. Esto fue recogido por las constituciones sinodales de Salamanca, donde se determinó que solamente se había de actuar cuando los delitos «fueran tan públicos y de tal calidad que, para mayor castigo suyo, sea necesario tratarse su causa públicamente».¹¹⁵ Si no se aunaban dichos factores se debía optar por una amonestación extrajudicial o, en su caso, por un «proceso cameral», de carácter sumario y cuyas características precisas desconocemos.

A este respecto, hay varias noticias interesantes en las visitas que si, por un lado suscitaron conflictos constituyeron, por otro, un recurso que los cabildos utilizaron para escapar a las sanciones más duras previstas en la legislación, como revela un episodio acontecido en Sevilla. En 1547, durante el episcopado de Fernando de Valdés, varios capitulares sevillanos fueron acusados ante el provisor de tener relaciones con ciertas mujeres. Como respuesta a dichas imputaciones, la corporación afirmó que dichas faltas se debían conocer en una visita, cosa que implicaba que no solamente quedaba al margen de las competencias de dicho oficial, sino que, asimismo, debían ser sancionadas con unas penas menos duras que las decretadas en un juicio.

denunciados por el cabildo sevillano, cometidos por algunos alguaciles del arzobispo fray Diego de Deza en octubre de 1509, se debieron a un intento de averiguar los posibles amancebamientos. Estos se juramentaron para defenderse de dicho prelado (Pineda 2015: 234-235).

¹¹³ ACS, Cj. 24, lg. 1, nº 9. El obispo de Osma escribió al rey, en julio de 1617, para comunicarle el descontento que había causado el escrito de Tosantos en la catedral de dicha ciudad y negó que los crímenes de los capitulares quedasen sin castigo (Archivo catedralicio de Zamora, leg. 39, doc. 7).

¹¹⁴ Bettoni 2006; Théry 2003.

¹¹⁵ Constituciones 1656: 83.

¹⁰⁷ Anónimo s. f. (B): 14r y ss. Anónimo 1746-1747: 178r-255r.

¹⁰⁸ ADS, lg. 38, exp. nº 106, ff. 6r-v.

¹⁰⁹ *Ibidem*, f. 9r.

¹¹⁰ Ribeiro da Silva 2013: 47.

¹¹¹ Rodríguez Sánchez 1984. Es importante considerar que en esta diócesis los obispos no estaban obligados con los adjuntos, de acuerdo con Gómez de la Caba s. f..

¹¹² Sobre su misión en Roma véase Amezcúa Morilla 1999. En el caso de Sevilla, se ha planteado la hipótesis de que los allanamientos

En efecto, cuando un visitador detectaba una infracción se solía amonestar al inculcado para que «hiciese enmienda de vida, una, dos y muchas veces, tanto por el prelado como por el deán». Solamente se debía proceder por la vía judicial cuando un individuo era declaradamente contumaz.¹¹⁶

Esto coincidía, en buena medida, con el Concilio de Trento que estableció que, antes de procesar a un clérigo amancebado notoriamente, esto es, aquel cuyo delito fuese manifiesto o evidente, dicho sujeto debía ser amonestado. Solamente los recalitrantes, es decir, aquellos que no se apartaban de sus amantes debían ser encausados.¹¹⁷ Si esto se aplicaba a dichos delincuentes, ¿qué decir de los demás?¹¹⁸

La adopción de dicho correctivo fue sugerida en diferentes lugares. En primer lugar, había que invitar a los clérigos a que dejaran sus relaciones. Si esto no era posible se les debía prohibir cualquier trato y, en caso de que fuesen reacios, se les había de castigar. Se sugirió, asimismo, que el mejor modo de solucionar este problema era desterrar a las mujeres «o a ellos, cuando no las quieran echar».¹¹⁹ Los obispos conqueses recogieron esta propuesta unas décadas más tarde. En 1649, el prelado de dicha diócesis planteó a la congregación de cardenales una serie de dudas sobre la visita de la catedral. Desde Roma, además de responder positivamente a su iniciativa de hacerla sin conjuces, siempre y cuando se impusiesen penas extrajudiciales, se aprobó la posibilidad de que se actuase penalmente contra las mujeres en los casos de incontinencia de los beneficiados del cabildo catedralicio.¹²⁰ Esto supuso que había que castigar a la parte más débil, dejando a un lado la adopción de medidas duras contra los beneficiados.

En este sentido, es, nuevamente, interesante el caso Roque Ruiz Barrios, quien fue reprendido varias veces para que se apartase de su sirvienta, con quien se sospechaba que mantenía una relación amorosa. Pese a la desobediencia de Roque, la justicia episcopal no se decidió a actuar en su contra. Por el contrario, fue el corregidor quien hizo lo oportuno, haciendo sacar a su amante, Paula Carnero, de la casa de Roque y condenándola a una pena de destierro. El arcediano hizo que esta volviese a Salamanca y la ocultó en su casa. El 28 de enero de 1648 la justicia laica, con permiso del tribunal episcopal, entró en dicho lugar en su busca. En el registro que se hizo, se descubrió, además, que el arcediano guardaba en su domicilio varias armas, como escopetas o pistolas. Solamente entonces, cuando el escándalo fue mayúsculo el provisor se decidió a actuar contra Roque Ruiz.

¹¹⁶ Pineda 2015: 246.

¹¹⁷ Estas disposiciones fueron utilizadas por otros cabildos en defensa de sus beneficiados. Así, por ejemplo, cuando en 1689 el maestrescuela de la catedral de Coria, Melchor de Coca, fue encarcelado en una causa de incontinencia, el cabildo exigió que se anulase el auto correspondiente y se cumpliesen las disposiciones conciliares, de modo que: «Lo primero amonestándoles que se abstengan y, si no lo hicieren, se les multa en la tercera parte de los frutos de sus beneficios... y si amonestados segunda vez no obedeciesen, se les multa y castiga, quitándoles no solo los frutos de sus beneficios y pensiones, sino es suspendiéndoles de la administración de ellos... por la tercera vez se les priva *in perpetuum* de todos los beneficios, porciones, oficios y pensiones eclesiásticas que tuviesen y se les declara por inhábiles» (Gómez de la Caba s. f.: 2r).

¹¹⁸ Sobre la notoriedad en sentido estricto: Schmoekel 2007; Gutierrez Masson 2016.

¹¹⁹ Biblioteca de la Universidad de Valladolid, ms. nº 316, f. 267.

¹²⁰ ACS, Cj. 24, lg. 1, nº 57.

Lo acontecido en este caso puede explicar lo que observamos en Murcia, donde varios racioneros fueron juzgados por el provisor tras la denuncia del alcalde mayor.¹²¹

En su confesión ante el provisor, el arcediano defendió su actuación con argumentos tanto personales como procesales:

... aunque después la volvieron a prender y la desterraron, por tener por cierto que el señor obispo no tendría a mal que la volviese y, por no haberle al dicho confesante notificado, ni requerido por su juez competente cosa en contrario y verse que no tenía quien le diese un jarro de agua, ni que le asistiese a sus grandes enfermedades.¹²²

Dado que consideraba que su «juez» era el obispo, acompañado necesariamente por los adjuntos, negó la validez de la actuación del corregidor. Por otro lado, su descaro llegó a tal punto que visitó a Paula varias veces, mientras esta permaneció en la cárcel episcopal. El fiscal llegó a afirmar que, por dicha razón, se entregó a dicha mujer al corregidor para que la desterrase.¹²³

El ejemplo referido muestra que, para resolver los conflictos, se recurrió, con frecuencia, a actuaciones extrajudiciales. Estas resultan difíciles de reconstruir puesto que, en muchos casos, no han dejado rastro escrito. En cierta medida, los obispos las utilizaron para vencer las resistencias de los cabildos, coartando la intervención de los adjuntos. Un buen ejemplo de ello es el intento del obispo de Astorga, Antonio de Cáceres, de corregir por dicha vía a un arcediano a quien ordenó, bajo pena de excomunión, que compareciese. Al negarse a ello, lo excomulgó. Posteriormente, este obtuvo una absolución del nuncio quien, además, expidió una inhibitoria.¹²⁴

Al parecer, dicho prebendado convivía en su domicilio, con gran escándalo, con varios hijos. Asimismo, «se trata ahora como muy mozo» y rondaba de noche por la ciudad con armas.¹²⁵ El prelado, que atribuyó el favor prestado por el nuncio al hecho de que dicho arcediano era colector de la Cámara apostólica, se quejó de la facilidad con que aquel admitía las apelaciones, estorbando el ejercicio de la jurisdicción diocesana. Asimismo, manifestó su perplejidad, dado que, si se trataba de amonestar a un súbdito:

... ni en derecho, ni en buena Teología, he yo hallado cómo puedo o debo publicar, en tribunal de vuestra señoría ilustrísima, las causas secretas de corrección fraterna que me mueven a llamarle, si no es comenzando al revés el orden que el Evangelio Santo tiene puesto en la corrección del hermano y ... diré que no sé cómo puede advocar a si causa entre obispo y súbdito, antes que llegue la primera instancia, porque si vuestra señoría ilustrísima desea saber las causas que me mueven a llamar al prebendado por sola curiosidad, bastantemente van expresadas en el mismo mandamiento, pues dice que lo llamo para cosas tocantes al servicio de nuestro Señor.¹²⁶

¹²¹ Irigoyen López 2010: 176.

¹²² ADS, lg. 51, exp. nº 24, f. 18r.

¹²³ *Ibidem*, f. 28v.

¹²⁴ Anónimo s. f. (B): 9r. En las visitas parece haberse utilizado también la corrección sin que se hiciese información sumaria (Pineda 2015: 242).

¹²⁵ Anónimo s. f. (B): 10r.

¹²⁶ *Ibidem*: f. 9v. El cabildo alegó que, debido a que era colector, dicho arcediano estaba exento de la jurisdicción ordinaria (Anónimo

Para aclarar esto último podemos recurrir, nuevamente, al jurista Luis Sarabia, quien refirió en su tratado las opiniones opuestas de los que creían que la monición del obispo no tenía efecto jurídico alguno y la de los que, por el contrario, pensaban que se podía entender como una citación.¹²⁷ La situación de los concubinarios era, como hemos visto, peculiar puesto que había que advertirles, en primer lugar, de que se apartasen de las mujeres sospechosas y, en caso de que se resistiesen, había que actuar judicialmente contra ellos, de acuerdo con la sesión 25, capítulo 14 del Concilio de Trento. Dicha exhortación no tenía, en todo caso, un carácter judicial sino que se trataba, más bien, de una monición «denuntiativa», cuyo objetivo era la corrección, de modo que en ella se dejaba de lado la punición.¹²⁸

Las quejas del prelado astorgano al nuncio no carecían de fundamento. Como hemos visto, los cabildos acudieron reiteradamente a dicha instancia para socavar las actuaciones de sus superiores. Esto lo hicieron, incluso, cuando estuvieron en juego intereses de carácter personal, como se comprueba, nuevamente, en el caso de Roque Ruiz, a quien el cabildo apoyó decididamente tras los acontecimientos del Corpus que hemos referido anteriormente. Para ello, no dudó en emplear todos los medios para obtener un veredicto a su favor, tanto en la Chancillería de Valladolid como ante la nunciatura. Así lo evidencian las cartas enviadas por la corporación salmantina a sus agentes en ambas sedes.¹²⁹

Finalmente, se intentó llegar a una componenda. Esto fue habitual y dichos acuerdos se hicieron efectivos gracias a la mediación del rey o del nuncio. En septiembre de 1638, dos beneficiados informaron de que el obispo estaba dispuesto a llegar a un compromiso para saldar la disputa. Asimismo, manifestaron que estaban abiertos a negociar otras cuestiones polémicas, como la posibilidad de que se realizase una información sumaria sin los adjuntos. La corporación catedralicia manifestó su deseo de consultar con las «Santas Iglesias» dicho asunto.¹³⁰ Por otro lado, el canónigo Saldaña puso en cuestión la posibilidad de que el obispo pudiese dictar un entredicho, puesto que, en su opinión, antes de decretarlo debía consultar con la corporación catedralicia.¹³¹

Frente a los intentos de llegar a un acuerdo, Roque envió una petición de amparo al Consejo de Castilla. Esto provocó que el cabildo se distanciase del arcedianato que dejó de apoyarle y le recomendó que siguiese el procedimiento en solitario.¹³² Es significativo que Roque dijese, cuando fue juzgado, que el capítulo le imponía sanciones continuamente, echándole del coro, con la consecuente pérdida de sus emolumentos.¹³³ Por otro lado, Roque se enfrentó con otros beneficiados, como Bartolomé García, a quien llamó judío.¹³⁴ En su acusación, el fiscal diocesano dijo que había

insultado a muchos sacerdotes, llamándoles judíos, moriscos, malnacidos y otras palabras injuriosas. Para justificarse, dijo que dichos actos se debieron a un impulso incontenible que se producía, recurrentemente, cuando discutía o se sentía ofendido.¹³⁵

Roque denunció, asimismo, la agresión que él y su criado sufrieron en mayo de 1638. La noche del día once de dicho mes, cuando se dirigía a casa del canónigo García de Águila, le salieron al paso unas personas embozadas y, tras preguntar al fámulo si era Roque quien iba delante, una de ellas, a quien este último dijo haber reconocido y que identificó con Pedro de Espinar, le tiró unas estocadas. Los agresores se ensañaron con el lacayo, a quien maltrataron.¹³⁶ Los beneficiados recurrieron para aclarar el suceso al obispo, si bien desconocemos el resultado de sus gestiones.

Un episodio que revela que algunos eclesiásticos cometieron desmanes, sin que estos pesasen de un modo decisivo en sus promociones o estatus gracias, en parte, a contar con apoyos en el círculo del nuncio, se refiere a Bernardo de Carvajal. Este, de acuerdo con una carta de 20 de octubre de 1637 obtuvo bulas de la coadjutoría del arcedianato de Alba en la catedral de Salamanca. El titular de dicha dignidad era su tío, don Cristóbal de Victoria, quien pretendió que se les diese cumplimiento. Al parecer, hubo una oposición a ello, porque cometió un escándalo anteriormente, en 1634, cuando mantuvo una relación sexual con una monja del convento de Santa Ana, quien dio a luz un niño que, por aquel entonces, se estaba criando en Valladolid. Tras la presión del nuncio, quien amenazó con decretar censuras, hubo un acuerdo por el que se le concedieron cuatro años para que, una vez enmendado, fuese admitido en el cabildo. Sin embargo, volvió a cometer un allanamiento en otro convento y estupró a una seglar, utilizando para ello una promesa de matrimonio. Esto ocurrió en Valladolid, donde los provisores de la sede vacante procedieron contra él y le tomaron confesión. Posteriormente, escapó de la cárcel y se sustanció el pleito en rebeldía.¹³⁷ Mientras tanto, Bernardo se ordenó con el fin de escapar al castigo que el Consejo de Castilla dictó contra él. Durante todo este tiempo tuvo el favor del nuncio, gracias a la mediación de sus familiares, particularmente su padre, Diego de Carvajal. A esto se opuso el representante del cabildo, si bien desconocemos cómo acabó el asunto. Esto demuestra que, en algunos casos, las medidas de gracia concedidas por la Santa Sede y sus representantes permitieron superar los obstáculos puestos por las sentencias de los jueces eclesiásticos.¹³⁸

entabló en su contra se suspendió.

¹³⁵ ADS, lg. 38, exp. nº 106, f. 19v. En su confesión, Roque lo atribuyó a una enfermedad del corazón y otros «achagues» originados por la melancolía. Todo ello hizo que «el más tiempo le privan de sentido y que no puede ser dueño de sus acciones muchas veces». Estas dolencias las sufrió, según su declaración, desde que fue coadjutor de su tío, Juan de Bargondia no pudiendo cumplir sus obligaciones. Por esta razón, vivió más de un año encerrado en su aposento y solo aceptó la presencia de Paula Carnero a quien recibió la madre de Roque, Catalina de Valdés, enferma y con achagues. Dicha sirvienta pasó cinco años con él (*ibidem*, ff. 11-v).

¹³⁶ ACS, Actas capitulares, libro 28, f. 995r.

¹³⁷ Algunos datos de la causa incoada en 1634 aparecen en: Real Academia de la Historia 1861: 25 y 50.

¹³⁸ ACS, Cj. 28, lg. nº 27. Esto se podría sumar a los casos referidos a Italia que revelan que las autoridades diocesanas buscaron resolver

1614: 57r).

¹²⁷ Sarabia 1624: 157.

¹²⁸ Sarabia 1624: 159-160. Incluso, determinó las condiciones necesarias para hacer efectiva en estos casos la excomunión.

¹²⁹ ACS, Cj. 28, lg. 2, nº 27.

¹³⁰ ACS, Actas capitulares, libro 28, f. 1014v.

¹³¹ *Ibidem*, f. 1014v. Por esta razón, Saldaña fue encarcelado por el obispo y el 28 de septiembre se nombraron adjuntos para proceder en su contra.

¹³² *Ibidem*, f. 1047.

¹³³ ADS, lg. 38, exp. nº 106, ff. 10v-11r.

¹³⁴ Antes tuvo una disputa con cuchilladas con un capellán (ACS, Actas capitulares, libro 28, f. 952v), aunque el procedimiento que se

Además de utilizar subterfugios legales, que incluyeron la apelación a instancias superiores, y de la propia actitud de la autoridad diocesana frente a los escándalos sexuales, el vacío de información que hemos hecho notar puede tener otra explicación. En efecto, los beneficiados, probablemente, llevaron sus tratos sexuales al ámbito doméstico y eligieron como cómplices a sus sirvientas.¹³⁹ Esto aconteció en Burgos donde, desde el siglo XV, la escasez de referencias a procesos relacionados con la vida sexual de los capitulares no implica que no cometiesen dichos excesos, como deja entrever la insistencia de la corporación en que sus miembros adoptasen un comportamiento honesto, así como las medidas promulgadas contra las concubinas. En su caso, solamente se actuó cuando las infracciones fueron públicas.¹⁴⁰

5. CONCLUSIONES

Los ritmos de implantación de las reformas en los diferentes cabildos y diócesis castellanos fueron desiguales. En este sentido, son interesantes los estudios de carácter local, como el que hemos propuesto. Como hemos visto, el caso salmantino pone de manifiesto los obstáculos que tuvieron que afrontar los obispos para asentar su primacía e impulsar la profesionalización del clero.

El proceso de imposición de la jurisdicción episcopal se vio limitado en la diócesis de Salamanca por los privilegios judiciales de los que gozaron los capitulares.¹⁴¹ La resistencia de estos últimos se reforzó desde Roma o la nunciatura. En diferentes momentos, los obispos salmantinos intentaron impartir justicia sin contar con los jueces adjuntos. Esto derivó en agrias polémicas que acabaron con el reconocimiento de la labor que debían desempeñar dichos magistrados.

Hubo también un elemento personal que no podemos pasar por alto y que consistió en el uso que el clero vinculado a la catedral hizo de la intervención de los adjuntos, con el objeto no solamente de poner obstáculos, sino también de contrarrestar el rigor de los jueces episcopales. Este corporativismo se manifiesta claramente en el caso de Roque Ruiz Barrios.

En repetidas ocasiones, los obispos se vieron obligados a aceptar ciertos límites a su labor, particularmente en lo que respecta a las medidas que se decretaban la fase sumaria de los procesos, más concretamente en las informaciones o los autos de prisión. Esto se extendió a las visitas, donde las propuestas del cabildo salmantino fueron, como hemos visto, más restrictivas.

los delitos de una manera rápida, sin escándalos e imponiendo penas leves; Mancino y Romeo 2014: 92.

¹³⁹ Este fenómeno pudo prolongarse en el tiempo; Sanz de la Higuera 2006. En otras diócesis, sin embargo, el fenómeno se produjo mucho antes; Iglesias Ortega 2011. En Sevilla, Fernando de Valdés (1546-1568) persiguió a varios canónigos acusándolos de vivir «desonestos públicamente» (Pineda 2015: 244).

¹⁴⁰ Guijarro 2013: 143-144. Nuevamente, esto contrasta con la situación posterior del obispado, donde los amancebamientos y los adulterios de los clérigos alcanzaron cotas de especial gravedad, particularmente en las zonas montañosas (Solórzano Telechea 2010). Son significativos los datos de las visitas episcopales de los siglos XVII y XVIII (Fonseca Montes 1996: 166-167 y también Orive Grisaleña 1998).

¹⁴¹ Fernández Terricabras 2010.

La documentación estudiada revela, puntualmente, el uso de vías extrajudiciales para corregir las faltas del clero. En Salamanca se estableció un proceso cameral, que constituyó un referente para algunos juristas y del que se hicieron eco otras constituciones¹⁴². Esto, si bien dejaba a un lado la intervención del capítulo, permitía, por otro, salvaguardar su prestigio, evitando una causa pública.

Por otro lado, el cabildo acaparó, como en otras diócesis, las causas disciplinarias, si bien sobrepasó las sanciones pecuniarias que se podían imponer en dicho ámbito, decretando penas de cárcel.

En cuanto al fenómeno de la profesionalización del clero, hemos de decir que se produjeron tensiones en torno a dos de las faltas que, en el caso del clero diocesano, fueron las más comunes. Por un lado, tenemos la violencia, ámbito donde, como hemos visto, los beneficiados incumplieron, hasta mediados del siglo XVI, las directrices del cabildo en relación al uso de las armas. Tras el Concilio de Trento su actitud, particularmente la de los canónigos, se moderó. En lo que respecta a la violación del celibato, se evidencian las dificultades que tiene que afrontar el historiador para su estudio y que se explican, en buena medida, por la existencia de vías extrajudiciales que no dejaron rastro escrito, así como, probablemente, por la ocultación de las relaciones sexuales.

Finalmente, hemos intentado aclarar algunas de las problemáticas estudiadas desde un punto de vista jurídico. Si bien surgieron en diferentes momentos en cada una de las catedrales, los argumentos extraídos del Derecho Canónico fueron comunes.

FUENTES

Anónimo 1614. *La catedral de Astorga da cuenta a vuestra Majestad de las ocasiones y causas de tanta inquietud de pleitos con que ha sido molestada en diez y nueve años que ha la gobierna don fray Antonio de Cáceres, su prelado*.

Anónimo 1746-1747. Arreglo de ciertos puntos entre el obispo y cabildo y tres informes sobre las diferencias entre ellos, 1746-1747. 1746-1747. Biblioteca de la Universidad de Valladolid, mss/272.

Anónimo s. f. (A). *Práctica judicial y modo que deben observar los prelados en sus visitas a los conventos y en substanciar los procesos*. Biblioteca Nacional, mss/6830.

Anónimo s. f. (B). *Relación que hace el fiscal del obispado de Astorga de todo lo sucedido en la Iglesia Catedral por ocasión de la jurisdicción de adjuntos que pretende el cabildo contra el obispo desde el año de 1597 hasta el presente de seiscientos y catorce a los señores de la junta que ha mandado hacer su Majestad para tratar el remedio de los desórdenes que se ven cada día, por tener los cabildos adjuntos*. s. f. Biblioteca Nacional, mss/13239.

Anónimo s. f. (C). *Traducción de la bula de concordia celebrada entre el ilustrísimo señor arzobispo de Sevilla y los señores Deán y Cabildo de su catedral iglesia, expedida por nuestro muy santo padre Inocencio duodécimo, sobre los diez dubios pertenecientes a la visita con expresión de los decretos del sagrado Concilio de Trento y bulas pontificias a que se remiten algunas de las decisiones de la bula*.

Araujo, F. 1654. *Variae et selectae decisiones morales ad statum ecclesiasticum et civilem pertinentes. Opus bipartitum suis summaris*

¹⁴² El obispo Juan Bernal Díaz Luco tomó como referente, a este respecto, lo establecido en Salamanca; Díaz Luco 1614: 342. En otros lugares, las constituciones sinodales siguieron la formulación hecha en los ordenamientos salmantinos; Constituciones 1607: 70, Constituciones 1622: 57; Sínodo 1687: 254.

- et indicibus necessariis exornatum*. Lyon: Philippe Borde, Laurence Arnaud, Pierre Borde, Guillaume Barbier.
- Barbosa, A. 1639. *Collectanea doctorum qui suis in operibus Concilii tridentini loca referentes illorum materia incidenter tractarunt et varias questiones in foro ecclesiastico versantibus maxime útiles et necessarias deciderunt*. Lugduni: Laurencio Durant.
- Constituciones 1573. *Constituciones sinodales del obispado de Salamanca del año de Mil y quinientos y setenta*. Salamanca: Domingo de Portonariis.
- Constituciones 1607. *Constituciones sinodales. Fechas y promulgadas en la primera sínodo que se celebró en la ciudad y obispado de Valladolid por el ilustrísimo y reverendísimo señor don Juan Bautista de Acevedo, patriarca de las Indias, segundo obispo del dicho obispado e inquisidor apostólico general en los reinos y señorios de su Majestad*. Valladolid: Casa de Juan de Bustillo.
- Constituciones 1622. *Constituciones sinodales del obispado de Orense, compiladas y hechas y promulgadas por su señoría ilustrísima don Pedro Ruiz de Valdivieso, arzobispo, obispo de Orense del Consejo de su Majestad en el primer sínodo que celebró en su catedral*. Madrid: Viuda de Alonso Martín de Balboa.
- Constituciones 1656. *Constituciones sinodales del obispado de Salamanca*. Salamanca: Diego de Cossío.
- Díaz Luco, J. B. 1614. *Practica criminalis canonica, seu litium controversiarumque in foro passim ecclesiastico verti solitarum copiosae, et iuridicae decisiones*. Venecia: Ioannem Guerilium.
- Gómez de la Caba, P. s. f. *Breves apuntamientos en que se manifiestan los agravios que ha hecho el señor obispo de Coria al licenciado don Melchor de Coca, claramente maestrescuela, dignidad y canónigo de la santa iglesia de la misma ciudad y examinador sinodal de aquel obispado y fiscal del Santo Tribunal de la Inquisición de Mallorca, en la causa que le ha fulminado sobre incontinencia y los motivos que ha tenido el metropolitano de Santiago, que reside en Salamanca para haber retenido la causa en su tribunal*.
- Real Academia de la Historia. 1861. *Memorial histórico español. Colección de documentos, opúsculos y antigüedades que publica la real academia de la Historia*. Tomo XIII. Madrid: Imprenta nacional.
- Sarabia, L. 1624. *Tractatus de iurisdictione adiunctorum coadiunctorum episcopum contra praebendarios suos criminaliter procedentem*. Zaragoza: Juan de Lanaja.
- Sínodo. 1687. *Sínodo diocesano del obispado de Huesca celebrada por el ilustrísimo y reverendísimo señor don Pedro Gregorio y Antillón, obispo de Huesca del Consejo de su Majestad, etc. en la ciudad de Huesca los días 18, 19 y 20 del mes de octubre del año de 1687*. Huesca: José Lorenzo de Larumbe.
- Valbuena, J. de s. f. *Por la santa iglesia de Palencia en la competencia con el señor obispo sobre la facultad de castigar el cabildo económicamente los delitos que los prebendados cometen intrasepta ecclesiae y que, en el caso de exceso el señor obispo para su conocimiento, se asocie con los jueces adjuntos de que goza el cabildo por ser exento de la jurisdicción ordinaria*.
- BIBLIOGRAFÍA**
- Amezcuá Morilla, M. 1999. «La Inmaculada y Guadix (I)». *Boletín del instituto de estudios "Pedro Suárez". Estudios sobre comarcas de Guadix, Baza y Huéscar* 12: 89-99.
- Barreiro Mallón, B. 1988: «El clero de la diócesis de Santiago a través de las visitas pastorales, visitas *ad limina*, registros de licencias ministeriales y concursos a curatos». *Compostellanum* XXIII: 489-515.
- Bettoni, A. 2006. «Voci malevole. Fama, noticia del crimine e azione del giudice nel proceso criminale (secc. XVI-XVIII)». *Quaderni Storici* 41 (21): 13-138.
- Candau Chacón, M. L. 1993. *Los delitos y las penas en el mundo eclesiástico sevillano del XVIII*. Sevilla: Diputación Provincial.
- Cobos Ruiz Adana, J. 1976. *El clero en el siglo XVII. Estudio de una visita secreta a la ciudad de Córdoba*. Córdoba: Escudero D. L.
- Coello de la Rosa, A. 2011. «El cabildo catedralicio y los jueces adjuntos en Lima colonial (1601-1611)». *Colonial Latin American Review* 20 (3): 331-361. <https://doi.org/10.1080/10609164.2011.624331>
- Corbacho González, V. E. 2016. *El ejercicio de la justicia eclesiástica en la Huelva del Antiguo Régimen. Delitos criminales en la villa de Calañas*. Huelva: Universidad de Huelva.
- Díaz Ibáñez, J. 1996. *La iglesia de Cuenca en la Edad Media (siglos XII-XV). Estructura institucional y relaciones de poder*. Tesis de doctorado. Madrid: Universidad Complutense.
- Dubert, I. 1996. «Alma de curas y cura de almas. Moral y comportamientos eclesiásticos en la Galicia interior durante el Antiguo Régimen (1600-1830)», en M. V. García Quintela, *Las religiones en la historia de Galicia*: 379-412. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela.
- Egido López, T. 2000. «El cabildo de Valladolid. Conflictos de jurisdicción», en F. J. Aranda Pérez, *Sociedad y élites eclesiásticas en la España Moderna*: 11-20. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
- Fernández Carrasco, E. 2015. «Ceremonial y loables costumbres de la catedral de cuenca durante la Semana Santa en el año 1617». *Estudios institucionales* II (2): 23-36. <https://doi.org/10.5944/eeii.vol.2.n.2.2015.18354>
- Fernández García, J. 1989. *El tribunal eclesiástico de Jaén (sección criminal): 1700-1750*. Tesis de doctorado. Universidad de Granada: Granada.
- Fernández Terricabras, I. 2000. *Felipe II y el clero secular. La aplicación del Concilio de Trento*. Madrid: Sociedad estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V.
- Fernández Terricabras, I. 2008. «Una tipología de conflictos urbanos. Cabildos catedralicios y obispos en la España posttridentina», en J. I. Fortea y J. E. Gelabert (eds.), *Ciudades en conflicto (siglos XVI-XVIII)*: 107-124. Madrid: Marcial Pons, Junta de Castilla y León.
- Fernández Terricabras, I. 2010. «La aplicación del Concilio de Trento en las catedrales: el cabildo de Plasencia y el concilio provincial compostelano de 1565». *Semata. Ciencias sociais e Humanidades* 22:195-212.
- Firpo, M. 2016. «Rethinking "Catholic Reform" and "Counter-Reformation": what happened in Early Modern Catholicism – a view from Italy». *Journal of Early Modern History* 20: 293-312. <https://doi.org/10.1163/15700658-12342506>
- Fonseca Montes, J. 1996. *El clero en Cantabria en la Edad Moderna. Un estudio sobre la implantación de la Contrarreforma en el norte de España*. Santander: Universidad de Cantabria.
- Forrestal, A. 2004. *Fathers, pastors and kings. Visions of episcopacy in Seventeenth-Century France*. Manchester: Manchester University Press.
- Gaztambide, J. 1975. «Los cabildos españoles y la confirmación del Concilio de Trento». *Annuario Historiae Conciliorum* 7: 425-458.
- Gil Sanjuán, J. 1994. «Lucha de los cabildos castellanos por su autonomía y libertad (1553-1555)». *Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV. Historia Moderna* 7: 275-296.
- Granado Hijelmo, I. 2010. «El régimen jurídico del cabildo catedralicio calagurritano hasta la codificación canónica de 1917». *Kalakorikos* 15: 37-96.
- Guijarro, S. 2013. «The Monastic Ideal of Discipline and the Making of Clerical Rules in Late Medieval Castile». *The Journal of Medieval Monastic Studies* 2: 131-150. <https://doi.org/10.1484/j.jmms.1.103651>
- Gutiérrez Masson, L. 2016. «Inquisitio, fama, evidentia: la contribución de Inocencio III a la teoría de la notoriedad del delito». *Vergentis: revista de investigación de la Cátedra Internacional conjunta Inocencio III* 2: 293-308.
- Iglesias Ortega, A. 2011. «La perpetuación de la sangre: la descendencia ilegítima del alto clero compostelano en el siglo XVI». *Manuscripts* 29: 137-155.
- Irigoyen López, A. 2010. «La difícil aplicación de Trento: las faltas de los capitulares de Murcia (1592-1622)». *Hispania Sacra* 125: 157-179. <https://doi.org/10.3989/hs.2010.v62.i125.246>
- Lop Otín, M. J. y López Gómez, O. 2015. «Entre la paz y el caos. Acción subversiva y actividad pacificadora en las élites urbanas. Toledo 1441-1495». *Hispania* LXXV (250): 413-440. <https://doi.org/10.3989/hispania.2015.013>
- Lorenzo Pinar, F. J. 2010. *Fiesta religiosa y ocio en Salamanca en el siglo XVII (1600-1650)*. Salamanca: Universidad de Salamanca.

- Mancino, M. y Romeo, G. 2014. *Clero criminale. L'onore della Chiesa e i delitti degli ecclesiastici nell'Italia della Controriforma*. Roma: Laterza.
- Mantecón Movellán, T. 2002. «El peso de la infrajudicialidad en el control del crimen durante la Edad Moderna». *Estudis* 28: 43-75.
- Marcocci, G. 2009. «O arcebispo de Braga, D. Frei Bartolomeu dos Mártires (1559-82): um caso de inquisição pastoral?». *Revista de História da Sociedade e da Cultura* 9: 119-146. https://doi.org/10.14195/1645-2259_9_4
- Marín, T. 1948. «Primeras repercusiones tridentinas. El litigio de los cabildos españoles. Su proceso en la diócesis de Calahorra». *Hispania Sacra* 1: 325-349.
- Monsalvo, J. M. 2009. «Violence between factions in Medieval Salamanca. Some problems of interpretation». *Imago Temporis. Medium Aevum* III: 129-170.
- Orive Grisaleña, M. 1998. «Visita pastoral del arzobispo Navarrete al arcedianato de Briviesca y otros arciprestazgos, 1706-1709». *Boletín de la Institución Fernán González* 216: 117-146.
- Pastore, S. 2001. «A proposito di Matteo 18,15: correctio fraterna e Inquisizione nella Spagna del Cinquecento». *Rivista Storica Italiana* CXIII: 323-368.
- Pérez Muñoz, I. 1992. *Pecar, delinquir y castigar: el Tribunal eclesiástico de Coria en los siglos XVI y XVII*. Cáceres: Diputación Provincial de Cáceres, Institución Cultural El Brocense.
- Pineda A. 2015. *El gobierno arzobispal de Sevilla en la Edad Moderna (siglos XVI-XVII)*. Tesis de doctorado. Sevilla: Universidad de Sevilla.
- Polo, J. J. 2005. *Historia de los obispos de Teruel (1614-1700)*. Teruel: Instituto de estudios turolenses.
- Quintana Andrés, P. C. 2001. «El cabildo catedral y el obispo Gutiérrez de Roza: poder y antagonismo en la diócesis de Canarias en el Seiscientos». *Boletín Millares Carlo* 20: 191-215.
- Ribeiro da Silva, H. 2013. *O clero catedralício português e os equilíbrios sociais do poder 1564-1670*. Lisboa: Universidade católica portuguesa.
- Rico Callado, F. L. 2014a. *La documentación judicial eclesiástica en la Edad Moderna. Estudio diplomático de los fondos diocesanos*. Cáceres: Universidad de Extremadura.
- Rico Callado, F. L. 2014b. «El uso de la excomunión en las diócesis españolas de la Edad Moderna a través del estudio de la documentación de los obispados extremeños». *Cauriensia* IX: 287-312.
- Rico Callado, F. L. 2015. «“Ruidos y rencillas en la catedral”. Las faltas de los beneficiados y la jurisdicción disciplinaria del cabildo catedralicio de Badajoz en época pretridentina». *Cauriensia* X: 409-435.
- Rodríguez Sánchez, A. 1984. *Hacerse nadie*. Cáceres: Universidad de Extremadura.
- Sánchez Benito, J. M. 2012. «Violencia y pugna política, estudio de sus repercusiones en el Mundo urbano a través del caso de Cuenca (siglo XV)». *Studia Histórica. Historia Medieval* 30: 237-262.
- Sánchez Herrero, J. 1976. «Vida y costumbres de los componentes del cabildo catedral de Palencia del siglo XV». *Historia, instituciones, documentos* 3: 485-532.
- Sánchez Rodríguez, A. M. 2004. «Las ceremonias públicas en Lugo durante la Edad Moderna. Conflictos de preeminencia entre obispo, cabildo y concejo». *Obradoiro de Historia Moderna* 13: 195-211. <https://doi.org/10.15304/ohm.13.568>
- Sangalli, M. (ed.) 2005. *Pastori, pope, preti, rabbini. La formazione del ministro di culto in Europa (secoli XVI-XIX)*. Roma: Carocci.
- Sangalli, M. 2007. «La formación del clero católico en la Edad Moderna. De Roma, a Italia, a Europa», *Manuscripts* 25: 101-128.
- Sanz de la Higuera, F. J. 2006. «“En casa [, cama] y compañía”. Yacer a lomos del XVIII en los hogares eclesiásticos burgaleses». *Hispania Sacra* LVIII (118): 545-577. <https://doi.org/10.3989/hs.2006.v58.i118.16>
- Saule, K. 2014. *Le curé au prétoire. La délinquance ecclésiastique face à l'officialité au XVIIe siècle*. Paris: LGDJ.
- Schmoeckel, M. 2007. «Requisitos de prueba: la exigencia de un mínimo de prueba y la notoriedad en el Derecho procesal medieval (siglos IX-XIII)». *Anuario argentino de derecho canónico* 14: 241-267.
- Solórzano Telechea, J. A. 2010. «Concubinarios, herejes y usurpadores: justicia eclesiástica, comunicación y propaganda en Las Montañas del obispado de Burgos en el siglo XV». *En la España Medieval* 33: 233-257.
- Suárez Golán, F. 2011. «“Todo es cuidar de las ceremonias”. Imagen y representación del poder en el episcopado gallego». *Obradoiro de Historia Moderna* 20: 197-219. <https://doi.org/10.15304/ohm.20.12>
- Théry, J. 2003. «Fama: l'opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l'inquisitoire (XII^e-XIV^e)», en B. Lemesle, *La preuve en Justice*: 119-147. Rennes: Presses universitaires de Rennes.
- Turchini, A. 1994. «La nascita del sacerdozio come professione», en P. Prodi (ed.), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*: 225-256. Bologna: Il Mulino.
- Vicente Baz, R. 2016. *Los libros de actas capitulares de la Catedral de Salamanca II (1489-1506)*. Salamanca: Publicaciones de la Catedral de Salamanca.